

Volumen 8 | Número 15 | Jul-Dic 2024 | ISSN E: 2590-5333

Revista de Administración Pública del GLAP

RAP-GLAP



LAGPA
Latin American Group
for Public Administration



GLAP
Grupo Latinoamericano
por la Administración Pública



ISSN-E: 2590-5333 / volumen 8 número 15, 2024 / Páginas: 3-5

Comité científico

Adrián Velázquez Vázquez, University of La Verne – Estados Unidos

Ariel Ramírez, Universidad de Chile – Chile

Bianor Scelza Cavalcanti, Fundação Getúlio Vargas - Brasil

Edgar Varela Barrios, Universidad del Valle – Colombia

Fernando López Parra, Instituto de Altos Estudios Nacionales – Ecuador

Luis Solari de la Fuente, Universidad Católica Sedes Sapientiae – Perú

Rubén Darío Echeverri, Universidad del Valle – Colombia

Comité editorial

Edgar Varela Barrios

Director

César Rojas Alfonso

Editor en Jefe

Mercedes Osorio Sierra

Yeison Cortes Castro

Coordinación Editorial

Ernesto Piedrahita

Asesor editorial y de Comunicaciones

Jorge Alejandro Soto Pérez

Diseño y diagramación

Soporte Editorial del International Institute

of Administrative Sciences (IIAS)

Paul Joyce, IIAS Publications Director

Fabienne Maron, IIAS Scientific Administrator

Sofiane Sahraoui, IIAS General Director

Editorial Fundación Cianara



Descripción

La Revista de Administración Pública del GLAP. RAP-GLAP es un medio de comunicación internacional publicado en formato digital cuyo objetivo principal es la divulgación de productos de investigación, artículos, ensayos y reseñas en las áreas de la Administración Pública y de las Políticas Públicas. Otro de sus objetivos es constituirse en escenario de debates de las tendencias nacionales e internacionales, propiciando la reflexión sobre comparaciones y análisis acerca de las nuevas técnicas y enfoques en el campo de la Administración Pública, con el fin de generar un diálogo entre académicos y profesionales.

La revista está dirigida a investigadores, académicos y profesionales en los campos de estudio de la Administración Pública y las organizaciones públicas, así como a dirigentes, empresas públicas y privadas, emprendedores, administradores de empresas y de negocios y estudiantes de pre y de postgrado de diversas disciplinas.



Acerca del IIAS

El *International Institute of Administrative Sciences* (IIAS) es una organización internacional sin fines de lucro con fines científicos y una federación de Estados miembros, secciones nacionales y centros de investigación académica que elaboran conjuntamente soluciones de Administración Pública para los desafíos políticos de la época.

El IIAS se estableció en 1930, con sede en Bruselas (Bélgica). Su visión es ser un actor clave en el establecimiento de la agenda de gobierno a nivel mundial. Facilita proyectos de colaboración y estratégicos con los miembros y asociados. Acredita los programas de capacitación tanto académicos como profesionales, de acuerdo con las normas de las mejores prácticas de gestión pública y organiza eventos de alto impacto en los que participan tanto la administración pública como el mundo académico.

Es también un holding de instituciones internacionales y regionales autónomas (IASIA, EGPA, AGPA y LAGPA).

- The European Group for Public Administration (EGPA)
- International Association of Schools and Institutes of Administration (IASIA)
- Latin American Group for Public Administration (LAGPA)
- Asian Group for Public Administration (AGPA)

The International Institute of Administrative Sciences (IIAS) is an international non-profit organization with scientific purposes. IIAS is a federation of member states, national sections and academic research centers jointly elaborating public administration solutions to the policy challenges of the day. It has been established in 1930 and is headquartered in Brussels, Belgium.

The IIAS is also a holding of autonomous international and regional institutions (IASIA, EGPA, AGPA & LAGPA).

The international Institute of Administrative Sciences is a worldwide professional association in the field of governance. IIAS is committed to practice and promotes the highest standards of service for ourselves, our members and our partners.

<https://www.iias-iisa.org/page/ABOUT%20IIAS>



Contenido

Editorial

ERNESTO PIEDRAHITA 7

Estudio de caso

Entre la norma y la realidad: Gobernanza territorial y capacidades institucionales
en el Distrito Especial de Buenaventura (Ley 1617 de 2013)
*Between Law and Practice: Territorial Governance and Institutional Capacity
in the Special District of Buenaventura (Law 1617 of 2013)* 9
MAIRA ALEXANDRA PRIETO PADILLA, EDWIN ARTURO LÓPEZ MUÑOZ

Artículos de Reflexión

Epistemología sobre la filosofía, las ciencias y los estudios políticos y jurídicos: Campo interdisciplinar
Epistemology on Philosophy, science, and Political and legal studies: Interdisciplinary field 19
JAHIR A. GUTIÉRREZ-OSSA, PORFIRIO CARDONA-RESTREPO

Más allá del orden liberal: reconfiguración geopolítica, transición energética y disputa tecnológica
*Beyond the Liberal Order: Geopolitical Reconfiguration, Energy Transition,
and Technological Competition* 33
GABRIEL OROZCO RESTREPO, GLEIDY ALEXANDRA URREGO ESTRADA

Educación Técnica y Tecnológica en Colombia: Hacia un Modelo de Desarrollo Sostenible.
Un análisis profundo sobre los desafíos, oportunidades y el camino a seguir para consolidar
la formación T&T como motor de desarrollo, equidad y competitividad nacional
*Technical and Technological Education in Colombia: Toward a Sustainable Development Model.
An in-depth analysis of the challenges, opportunities, and the path forward to consolidate technical
and technological training as a driver of development, equity, and national competitiveness* 41
LORENZO PORTOCARRERO SIERRA

Artículo de Investigación

Política pública de salud mental: Desigualdades, violencias y consumo problemático
de sustancias psicoactivas
*Mental Health Public Policy: Inequalities, Violence, and Problematic
Consumption of Psychoactive Substances* 49
MARÍA DEL PILAR BALANTA-MARTÍNEZ

Instrucciones a los autores 59



Editorial

Como en todas las ediciones de la Revista GLAP, en este número se presentan artículos basados en investigaciones vinculadas con las temáticas de las políticas públicas, la gestión pública, la administración pública, geopolítica y ciencia política, principales disciplinas de trabajo de quienes hacen parte del Grupo Latinoamericano por la Administración Pública.

Entre la norma y la realidad: Gobernanza territorial y capacidades institucionales en el Distrito Especial de Buenaventura, es el título del artículo presentado por los investigadores Maira Alexandra Prieto padilla y Edwin Arturo López Muñoz. Este artículo examina los impactos de la Ley 1617 de 2013 sobre la gobernanza territorial y la capacidad institucional de la Alcaldía Distrital de Buenaventura.

Entre los resultados del estudio aparece la aplicación del régimen distrital ha sido predominantemente formal, con débil articulación interinstitucional, baja participación de actores locales y limitada capacidad administrativa. Se concluye que el modelo de distritos especiales requiere acompañamiento técnico, financiación sostenida y mecanismos de gobernanza multinivel que reconozcan las particularidades de los territorios periféricos. Es un modelo de análisis que sirve como referente para el estudio de casos de descentralización y desconcentración administrativa en Colombia y en otros países.

Los investigadores Gabriel Orozco Restrepo y Gleidy Alexandra Urrego Estrada presentan los resultados del estudio “Más allá del orden liberal: reconfiguración geopolítica, transición energética y disputa tecnológica” que se enfoca en establecer cómo el orden liberal tradicional del sistema internacional atraviesa en el siglo XXI una mutación que combina la declinación, el auge de economías del Sur Global y la emergencia de la transición energética y la revolución digital como ejes de competencia.

Se hacen reflexiones desde la perspectiva latinoamericana tales como el ascenso de los BRICS+ y la rivalidad entre China y Estados Unidos por el control de las tecnologías limpias y de los recursos estratégicos reconfiguran la geopolítica. La ruta metodológica es de corte descriptiva, a partir de la revisión de documentos oficiales en los cuales se presenta la trayectoria de América Latina como periferia exportadora marcada por la heterogeneidad estructural.

Se revisan los conceptos de geopolítica, geoeconomía e interdependencia compleja; por último, se examinan casos de países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia que lideran la transición energética, así como proyectos de hidrógeno verde y las estrategias de Chile, Perú y Centroamérica.

En el artículo Educación Técnica y Tecnológica en Colombia: Hacia un Modelo de Desarrollo Sostenible, el investigador Lorenzo Portocarrero Sierra presenta cómo la educación técnica y tecnológica (T&T) se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico y social en los países que han comprendido que el progreso sostenible se construye desde el conocimiento aplicado, la innovación y el fortalecimiento del talento humano.

La automatización, la inteligencia artificial, la física cuántica, la digitalización y las nuevas demandas del mercado laboral exigen un sistema educativo capaz de formar profesionales con habilidades técnicas, digitales y humanas que respondan a un entorno en permanente cambio. En este escenario, la educación T&T emerge como la respuesta más pertinente para articular el aprendizaje con las oportunidades reales de empleo, la productividad regional y el desarrollo sostenible. Sin embargo, para que esta promesa se convierta en realidad, Colombia debe enfrentar desafíos culturales, estructurales y de articulación que aún frenan su potencial transformador.

Jahir A. Gutiérrez-Ossa y Porfirio Cardona-Restrepo presentan “Epistemología sobre la filosofía, las ciencias y los estudios políticos y jurídicos: Campo interdisciplinar” El contenido del artículo establece fundamentos de carácter epistemológico de la filosofía política y jurídica como base interdisciplinar. Así mismo, analiza el papel de las ciencias políticas y jurídicas como referente científico interdisciplinario.

El estudio establece elementos que sustentan cómo los estudios de lo político y lo jurídico se refuerzan con la triada Ciencia-filosofía-epistemología para establecer elementos explicativos que permitan sustentar elementos de políticas públicas, programas, planes y proyectos para dar sustento con bases filosóficas, criterios de corte científico y justificaciones con bases epistemológicas.

Política pública de salud mental: Desigualdades, violencias y consumo problemático de sustancias psicoactivas, es el artículo presentado por la investigadora María del pilar Balanta-Martínez donde aborda el consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye un desafío para las , políticas públicas de salud mental en el mundo, este es un asunto que comúnmente se analiza desde enfoques clínicos centrados en las personas, sin embargo estudios recientes han sugerido la importancia de considerar los determinantes sociales de salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

Este artículo derivado de una investigación doctoral analiza la relación entre desigualdades sociales, violencia y consumo problemático de sustancias psicoactivas. Se utilizó un diseño cuantitativo con población en tratamiento por adicción a sustancias psicoactivas, los resultados generales muestran una alta presencia de experiencia de violencias a lo largo de la vida entre las personas participantes, a las que han hecho frente desde distintos roles (víctimas, victimarios o testigos), así como condiciones sociales caracterizadas por desigualdades estructurales y temprano inicio en el consumo de sustancias psicoactivas.

Ernesto Piedrahita
ASESOR EDITORIAL Y DE COMUNICACIONES





Entre la norma y la realidad: Gobernanza territorial y capacidades institucionales en el Distrito Especial de Buenaventura (Ley 1617 de 2013)

Between Law and Practice: Territorial Governance and Institutional Capacity in the Special District of Buenaventura (Law 1617 of 2013)

MAIRA ALEXANDRA PRIETO PADILLA¹
EDWIN ARTURO LÓPEZ MUÑOZ²

Clasificación PUBLINDEX-MINCIENCIA: Estudio de caso

Recibido: diciembre 2024

Aceptado: junio 2025

Resumen

Este artículo examina los impactos de la Ley 1617 de 2013 sobre la gobernanza territorial y la capacidad institucional de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. Se analiza la brecha entre el diseño normativo del régimen especial y su implementación práctica, identificando los factores que han limitado la efectividad del modelo distrital como instrumento de fortalecimiento estatal y desarrollo local. Mediante una metodología mixta con enfoque de estudio de caso, se abordan dimensiones institucionales, sociales y políticas que condicionan el ejercicio de la autonomía territorial. Los resultados muestran que la aplicación del régimen distrital ha sido predominantemente formal, con débil articulación interinstitucional, baja participación de actores locales y limitada capacidad administrativa. Se concluye que el modelo de distritos especiales requiere acompañamiento técnico, financiación sostenida y mecanismos de gobernanza multinivel que reconozcan las particularidades de los territorios periféricos.

Palabras clave: Gobernanza territorial, capacidad institucional, descentralización, distritos especiales, Buenaventura.

Abstract

This article examines the impacts of Law 1617 of 2013 on territorial governance and the institutional capacity of the Buenaventura District Mayor's Office. It analyzes the gap between the normative design of the special district regime and its practical implementation, identifying factors that have limited the effectiveness of the district model as a tool for state strengthening and local development. Using a mixed-methods approach with a case study focus, the study addresses institutional, social, and political dimensions that influence the exercise of terri-

¹ MSc en Políticas Públicas. Economista de la Universidad del Valle

² PhD. (c) Doctor en Gobierno, Administración Pública y Políticas Públicas, MSc en Políticas Públicas de la Universidad del Valle.

torial autonomy. The results show that the application of the district regime has been predominantly formal, with weak inter-institutional coordination, low participation of local actors, and limited administrative capacity. It is concluded that the special district model requires technical support, sustained funding, and multi-level governance mechanisms that recognize the particularities of peripheral territories.

Keywords: territorial governance, institutional capacity, decentralization, special districts, Buenaventura.

Consideraciones éticas:

El estudio se desarrolló bajo los principios de respeto, confidencialidad y consentimiento informado. No se identificaron riesgos para los participantes, y los datos fueron tratados exclusivamente con fines académicos.

Introducción

El proceso de descentralización en Colombia ha estado marcado por múltiples reformas que buscan redistribuir competencias, recursos y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, esta descentralización ha sido más normativa que efectiva, generando un desequilibrio entre los instrumentos legales y las capacidades reales de los gobiernos locales para ejercer su autonomía. En este contexto, la Ley 1617 de 2013, que regula el Régimen de los Distritos Especiales, constituye un intento de fortalecer la gestión territorial en ciudades con relevancia económica, estratégica o cultural. No obstante, su implementación ha evidenciado profundas brechas institucionales, especialmente en territorios con debilidad histórica en su aparato administrativo, como Buenaventura.

Buenaventura, puerto principal sobre el Pacífico colombiano, fue elevado a la categoría de Distrito Especial, Portuario, Industrial, Biodiverso y Ecoturístico mediante la Ley 1617.

Con ello, se buscaba dotar al municipio de herramientas de planeación, autonomía administrativa y fiscal, así como de nuevas figuras institucionales, como el Establecimiento Público Ambiental (EPA) y las localidades. Sin embargo, más de diez años después de la promulgación de la norma, persisten los problemas estructurales de gobernabilidad, fragmentación administrativa y baja capacidad para articular las políticas públicas con las necesidades ciudadanas.

La relevancia de este estudio radica en que permite examinar el alcance real del régimen distrital y su impacto sobre la gobernanza local. Analizar Buenaventura no solo revela las tensiones entre el diseño institucional y la práctica gubernamental, sino también las limitaciones de los procesos de descentralización en contextos de alta conflictividad social y debilidad estatal. El objetivo central de este artículo es analizar los impactos de la implementación del régimen de distrito especial sobre la capacidad institucional y la gobernanza territorial del Distrito de Buenaventura, identificando los principales logros, obstáculos y aprendizajes derivados de su aplicación.

La estructura del artículo sigue el formato de un trabajo de investigación científica: primero se expone el marco teórico, que aborda los conceptos de gobernanza territorial y capacidad institucional; luego se detalla la metodología adoptada, basada en un estudio de caso con enfoque mixto; posteriormente se presentan los resultados y la discusión, donde se interpretan los hallazgos a la luz de la teoría; y finalmente, se plantean las conclusiones, que reflexionan sobre los desafíos de los distritos especiales en Colombia y las lecciones que deja el caso de Buenaventura.

Contexto

La configuración de Buenaventura como Distrito Especial, Portuario, Industrial, Biodiverso y Ecoturístico, establecida mediante la Ley 1617 de 2013, introdujo un nuevo marco institucional orientado a fortalecer la gobernanza territorial, la autonomía administrativa y la descentralización

intradistrital. Dicha ley atribuye a los distritos especiales la responsabilidad de crear un establecimiento público ambiental encargado de ejercer las funciones de autoridad ambiental previstas en la Ley 99 de 1993, con jurisdicción sobre las zonas urbanas y suburbanas del territorio. Este mandato implica la asunción de competencias equivalentes a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, así como la obligación de promover procesos de descentralización local a través de la conformación de localidades y juntas administradoras que acerquen la gestión pública a la ciudadanía y consoliden mecanismos de democracia participativa.

Para Buenaventura, la aplicación de este régimen especial representa simultáneamente un desafío estructural y una oportunidad estratégica. Supone la necesidad de reinventar y reconstruir el aparato administrativo local con el propósito de mejorar sus capacidades de gestión, modernizar sus esquemas fiscales, fortalecer la planeación territorial y ampliar los canales de participación social. En efecto, el tránsito hacia el modelo distrital demanda un rediseño institucional que permita superar las limitaciones históricas del municipio, caracterizadas por la fragmentación administrativa, la baja capacidad técnica y la débil articulación entre los distintos niveles de gobierno.

En este contexto, la investigación se justifica por su aporte al análisis de los efectos del régimen normativo diferenciado sobre la capacidad estatal y la gobernanza territorial. Examinar el caso de Buenaventura permite comprender cómo la adopción de un marco jurídico especial incide en la dinámica de las instituciones locales, en la relación entre los niveles de gobierno y en la interacción con los diversos grupos de interés que configuran el territorio. De igual modo, ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las condiciones necesarias para que la descentralización diferenciada contribuya efectivamente al fortalecimiento del Estado y al desarrollo local.

El estudio reviste especial relevancia para la política pública nacional, dado que permite ex-

traer aprendizajes aplicables a otros municipios que podrían transitar hacia la categoría de distrito especial, aportando orientaciones sobre los requerimientos institucionales, fiscales y territoriales que deben considerarse en tales procesos.

Con base en este contexto, la investigación plantea la siguiente pregunta central: ¿Cuál ha sido el impacto de la implementación de la Ley 1617 de 2013 sobre la capacidad de la Alcaldía Distrital de Buenaventura para ejercer gobernanza territorial?

A partir de esta formulación, el estudio tiene como objetivo general analizar el impacto del régimen especial sobre la capacidad institucional y la gobernanza territorial de Buenaventura. De manera complementaria, se propone identificar los cambios institucionales derivados de la aplicación de la ley, caracterizar los impactos en las relaciones entre la administración distrital y los grupos de interés, y reconocer los retos y oportunidades que el modelo de distritos especiales plantea en el contexto colombiano.

En suma, la investigación se orienta a comprender las implicaciones políticas, administrativas y sociales de la implementación de un régimen normativo diferenciado en un territorio con debilidades estructurales, aportando evidencia sobre los desafíos de la descentralización y la necesidad de fortalecer la capacidad estatal como condición indispensable para una gobernanza territorial efectiva y equitativa.

Caracterización General del Distrito de Buenaventura

El Distrito Especial de Buenaventura, situado en la región Pacífica del Valle del Cauca, constituye el municipio de mayor extensión del departamento (6.078 km²) y uno de los territorios con mayor diversidad biológica en Colombia, dada la coexistencia de ecosistemas andinos, subandinos, pluviales y de manglar. Este entorno natural alberga recursos estratégicos como madera, minerales (oro, platino y carbón) y reservas petrolíferas aún no explotadas. En términos de-

mográficos, la población pasó de 328.753 habitantes en 2005 a 407.675 en 2016, con un proceso sostenido de urbanización que supera el 90% de la población total. El crecimiento urbano se ha concentrado especialmente en las comunas 5, 7 y 8, mientras que la población rural experimenta una reducción asociada a dinámicas de violencia, desplazamiento forzado y reconfiguración territorial derivada de la presencia de actores armados y economías ilícitas.

Desde una perspectiva socio-cultural, Buenaventura es un territorio predominantemente afrodescendiente e indígena, cuyas identidades colectivas se constituyen a partir de la relación histórica con el entorno natural, la tradición oral y prácticas comunitarias. Estas expresiones culturales coexisten con procesos persistentes de exclusión asociados al modelo extractivo que ha caracterizado la región desde la colonia, cuando el territorio fue configurado como un enclave para la extracción de recursos y no como un espacio de desarrollo integral. Esta condición se refleja en sus indicadores sociales: a pesar de que el puerto moviliza más del 50% del comercio exterior del país, el distrito registra altos niveles de pobreza estructural. En 2011, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas alcanzó 34,52% en la cabecera urbana y 47,32% en la zona rural, duplicando el promedio departamental y superando ampliamente el nacional, lo que evidencia la coexistencia de riqueza geoestratégica y precariedad socioeconómica.

En el plano político-administrativo, Buenaventura se organiza en 12 comunas urbanas y 19 corregimientos rurales, en concordancia con el Acuerdo Municipal 015 de 1989. No obstante, esta estructura formal se superpone con autoridades étnicas que ejercen funciones de autogobierno, particularmente en la zona rural. Los consejos comunitarios de comunidades negras —regidos por la Ley 70 de 1993— poseen derechos de propiedad colectiva y desempeñan un papel central en la gestión y regulación territorial. Para 2011 se registraban 44 consejos comunitarios, de los cuales 34 contaban con reconocimiento formal. Asimismo, existen siete resguardos indígenas

titulados, pertenecientes a los pueblos Wauna-na, Embera y Embera Chamí, que agrupan 191 familias en un territorio de 11.493 hectáreas. Esta superposición institucional configura un escenario de gobernanza compleja y frecuentemente tensionada, debido a las distintas normatividades, autoridades y escalas de decisión que coexisten en el territorio.

En materia de seguridad, Buenaventura ha sido históricamente un corredor estratégico para economías ilícitas, incluyendo narcotráfico, tráfico de armas y contrabando. La disputa por el control territorial entre grupos armados ilegales ha generado altos índices de homicidio, desaparición forzada y desplazamiento, superando los promedios nacional y departamental. Estas dinámicas evidencian la limitada capacidad del Estado para garantizar derechos, asegurar la presencia institucional y ejercer control efectivo sobre el territorio.

Desde el punto de vista económico, el distrito presenta una fuerte especialización en el sector terciario, que representa alrededor del 89,5% del PIB, seguido por el sector secundario (8,4%) y el primario (2,1%). Las actividades con mayor participación corresponden a administración pública, servicios inmobiliarios y empresariales, mientras que la industria y la construcción presentan una contribución marginal, lo que refleja una limitada capacidad de transformación productiva. La actividad portuaria, altamente productiva, opera bajo un modelo de enclave con escasa articulación con la economía local y reducida generación de empleo formal. Entre 2004 y 2011, la tasa de desempleo pasó de 28,8% a 40,4%, en un contexto caracterizado por migración interna, inserción laboral temprana y debilidad del aparato productivo. En la zona rural, predominan actividades como pesca artesanal, minería informal, agroforestería y turismo comunitario de pequeña escala, con impactos ambientales significativos.

En conjunto, la caracterización del territorio evidencia una estructura socioeconómica y política marcada por desigualdades, gobernanza

fragmentada, conflictividad armada y una economía portuaria desconectada del desarrollo local. Este contexto constituye el marco estructural desde el cual se analizan los alcances y desafíos de la implementación del régimen de distrito especial establecido por la Ley 1617 de 2013, así como las tensiones inherentes entre desarrollo económico, gobernanza territorial y bienestar ciudadano.

Marco teórico

La gobernanza territorial se concibe como un proceso dinámico que articula actores, instituciones y recursos para la toma de decisiones colectivas en torno al desarrollo de un territorio. Desde autores como Healey (1997) y Jessop (2004), la gobernanza va más allá de la gestión administrativa y se orienta hacia la construcción de redes colaborativas entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. En este sentido, implica una visión relacional del poder, donde la coordinación horizontal y la confianza institucional resultan tan relevantes como las jerarquías formales.

En América Latina, los procesos de descentralización han estado acompañados de debates sobre la eficacia de la gobernanza local. Para autores como Mayntz (1999) y Prats (2005), la descentralización solo contribuye al desarrollo cuando los gobiernos locales disponen de capacidades técnicas, financieras y políticas para ejercer su autonomía. De lo contrario, la transferencia de competencias puede generar sobrecarga institucional y fragmentación, más que fortalecimiento del Estado.

El concepto de capacidad institucional se entiende como la habilidad de las organizaciones públicas para formular, coordinar y ejecutar políticas efectivas (Andrews, Pritchett y Woolcock, 2017). Esta capacidad se expresa en dimensiones administrativas (gestión del talento humano, planeación, control interno), políticas (liderazgo, gobernabilidad, legitimidad) y adaptativas (aprendizaje y flexibilidad). En contextos de debilidad estatal, como muchos territorios peri-

féricos de Colombia, la capacidad institucional es un factor determinante para la sostenibilidad de las reformas.

El régimen de distritos especiales, en tanto instrumento de diferenciación territorial, pretende ofrecer un marco de autonomía y especialización funcional. Sin embargo, como señalan Varela (2015) y Rincón (2019), la existencia de marcos normativos avanzados no garantiza su materialización. La experiencia de Buenaventura ilustra un tipo de descentralización incompleta: las nuevas estructuras institucionales no se tradujeron en mayor capacidad operativa ni en mejoras sustanciales en la calidad del gobierno local.

Desde una perspectiva crítica, la gobernanza territorial debe entenderse también como un campo de disputas. En Buenaventura, los conflictos entre el nivel nacional, los actores locales y los intereses portuarios han configurado una gobernanza fragmentada, donde la participación ciudadana es limitada y los mecanismos de articulación son débiles. Esta situación se agrava por la persistente inequidad socioeconómica y los rezagos en infraestructura, que restringen las posibilidades de desarrollo endógeno.

En síntesis, el marco teórico articula los conceptos de gobernanza territorial y capacidad institucional para analizar la implementación de la Ley 1617. Este enfoque permite comprender cómo la formalización de nuevas competencias no necesariamente conlleva a una transformación efectiva del poder local, y cómo la autonomía normativa sin fortalecimiento institucional puede derivar en un ejercicio simbólico de la descentralización.

Metodología

Este estudio adopta un enfoque mixto con diseño exploratorio-descriptivo, combinando técnicas cualitativas y cuantitativas. El método principal es el estudio de caso, que permite profundizar en la comprensión de procesos complejos de cambio institucional a partir de

un territorio específico: el Distrito Especial de Buenaventura.

Se realizó una revisión exhaustiva de fuentes normativas (Ley 1617 de 2013, acuerdos distritales, planes de desarrollo), informes institucionales (Contraloría General, Alcaldía Distrital, EPA Buenaventura) y literatura académica nacional e internacional sobre descentralización, gobernanza y capacidad institucional. Esta revisión permitió construir una línea base sobre la evolución de la gestión pública local desde la transformación en distrito.

Se aplicaron entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la Alcaldía Distrital, representantes del EPA, líderes de organizaciones sociales y académicos locales. El propósito fue captar percepciones sobre los avances y obstáculos en la implementación del régimen especial. Las entrevistas fueron analizadas mediante codificación temática, identificando patrones de sentido y categorías emergentes relacionadas con gobernanza, participación y gestión administrativa.

La información cualitativa se procesó a través de análisis de contenido, mientras los datos cuantitativos —principalmente indicadores socioeconómicos y presupuestales— fueron tratados de forma descriptiva, apoyándose en fuentes oficiales (DANE, DNP, Alcaldía de Buenaventura). La triangulación entre datos y testimonios permitió garantizar la validez interna del estudio.

Resultados y discusión

Transformaciones institucionales formales

La Ley 1617 estableció nuevas competencias y estructuras para los distritos especiales. En Buenaventura, esto se tradujo en la creación del EPA y en la delimitación de localidades. Sin embargo, estas transformaciones no contaron con estudios de viabilidad ni con recursos adecuados. El EPA, por ejemplo, asumió funciones ambientales complejas sin personal técnico ni

autonomía presupuestal, lo que limitó su capacidad para ejecutar acciones efectivas de control ambiental.

La administración distrital continuó operando bajo una lógica centralizada, con escasa delegación hacia las localidades. Los mecanismos de planeación participativa, previstos en la norma, no se consolidaron, y los procesos de articulación interinstitucional permanecen débiles. La estructura administrativa se amplió en términos formales, pero no en eficiencia ni desempeño.

Marco normativo

El marco normativo que sustenta la creación y funcionamiento de los distritos especiales en Colombia se encuentra principalmente en la Ley 1617 de 2013, la cual establece el régimen político, fiscal, administrativo y de planeación aplicable a estas entidades territoriales. Esta ley busca reconocer la singularidad de ciertos municipios que, por su importancia económica, cultural, histórica o geoestratégica, merecen un tratamiento diferenciado. En el caso de Buenaventura, la norma la define como Distrito Especial, Portuario, Industrial, Biodiverso y Ecoturístico, lo que supone un conjunto de competencias exclusivas orientadas a promover un desarrollo integral y sostenible

La Ley 1617 de 2013 amplía las competencias de los distritos en materia de planeación, ordenamiento territorial, ambiente, cultura, turismo, seguridad, transporte y desarrollo portuario. Asimismo, establece un sistema de localidades con juntas administradoras locales (JAL) y alcaldes locales, con el propósito de acercar la gestión pública a los ciudadanos y facilitar la descentralización intra-distrital. La norma también ordena la creación de un Establecimiento Público Ambiental (EPA) con funciones similares a las de las Corporaciones Autónomas Regionales, encargado de la protección de los recursos naturales y del cumplimiento de la política ambiental dentro del territorio distrital.

Además de la Ley 1617, la Constitución Política de 1991 en su artículo 322 y siguientes, y la Ley 489 de 1998 sobre organización y funcionamiento de las entidades del Estado, sirven de sustento para definir las bases de la autonomía administrativa, la descentralización y la gestión territorial. De igual manera, la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan de Desarrollo) orienta los procesos de planeación distrital, y la Ley 715 de 2001 regula las competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, de los cuales dependen en gran medida los distritos y municipios.

En el caso de Buenaventura, la transformación institucional derivada de la Ley 1617 fue acompañada por decretos reglamentarios y acuerdos locales que buscaron armonizar la estructura administrativa con las nuevas disposiciones. Sin embargo, la implementación del marco normativo se enfrentó a vacíos jurídicos y a la falta de lineamientos técnicos del nivel nacional para orientar el proceso de transición. El diseño institucional resultó avanzado en términos legales, pero insuficiente en mecanismos operativos, lo que afectó la materialización de la autonomía prevista.

Por tanto, el marco normativo colombiano ofrece una base sólida para la diferenciación territorial, pero en la práctica su efectividad depende del grado de preparación administrativa, la coordinación multinivel y la asignación real de recursos. En el caso de Buenaventura, la brecha entre la norma y la realidad institucional refleja la distancia entre el discurso de la descentralización y las condiciones estructurales para ejercerla.

Gobernanza fragmentada y baja articulación

La gobernanza local en Buenaventura se caracteriza por la coexistencia de múltiples actores con intereses divergentes: el gobierno nacional, el sector portuario, los consejos comunitarios afrodescendientes, las organizaciones sociales y la administración distrital. Esta multiplici-

dad, en lugar de fortalecer la cooperación, ha producido fragmentación y desconfianza. Las decisiones estratégicas sobre desarrollo portuario y ambiental se concentran en el nivel central, mientras las responsabilidades sociales recaen sobre el nivel local.

La falta de mecanismos efectivos de coordinación horizontal y vertical ha impedido que el régimen especial funcione como un instrumento de gobernanza multinivel. En consecuencia, la autonomía formal del distrito no se traduce en poder real de decisión sobre su territorio.

Capacidad institucional limitada

En términos de capacidad administrativa, la Alcaldía de Buenaventura enfrenta deficiencias en talento humano, gestión presupuestal y planeación. Las entidades creadas bajo el nuevo régimen carecen de estabilidad financiera y dependen de transferencias nacionales. La baja ejecución de proyectos y la debilidad en el control interno afectan la credibilidad institucional.

Discusión interpretativa

Los hallazgos confirman que la descentralización en Colombia enfrenta una paradoja estructural: se transfieren responsabilidades sin garantizar las capacidades necesarias para asumirlas. En Buenaventura, la Ley 1617 fue una oportunidad perdida de modernización institucional, pues no estuvo acompañada de procesos de fortalecimiento técnico ni de participación social efectiva.

Desde la teoría de la gobernanza, el caso ilustra un modelo híbrido, donde coexisten lógicas centralizadas con estructuras formales de autonomía. La capacidad institucional, en lugar de fortalecerse, se ha burocratizado. Estos resultados coinciden con los planteamientos de Andrews et al. (2017), quienes señalan que la construcción de capacidades estatales requiere procesos adaptativos, aprendizaje y liderazgo comprometido, más que simples reformas legales.

Cambios institucionales específicos e impactos sobre las relaciones del gobierno distrital con los grupos de interés

La implementación de la Ley 1617 de 2013 generó transformaciones institucionales de alcance formal en la estructura del gobierno distrital de Buenaventura. En primer lugar, se creó el Establecimiento Público Ambiental (EPA Buenaventura) como entidad encargada de liderar la gestión ambiental local. Esta institución asumió competencias antes ejercidas por la CVC, lo cual representó un avance hacia la autonomía, pero también un desafío, dado que el nuevo organismo careció desde su inicio de infraestructura técnica y presupuesto suficiente. Su dependencia financiera del municipio limitó su capacidad de actuación y debilitó su legitimidad frente a la ciudadanía.

Otro cambio significativo fue la división del territorio en localidades, concebida para acercar la administración a las comunidades. Sin embargo, estas estructuras no se consolidaron debido a la ausencia de recursos y a la falta de claridad en las funciones de las Juntas Administradoras Locales (JAL). El centralismo persistente en la Alcaldía Distrital impidió el desarrollo de una verdadera descentralización intra-distrital, reproduciendo las mismas lógicas burocráticas que la ley buscaba superar.

En cuanto a las relaciones entre el gobierno distrital y los grupos de interés, la implementación del régimen especial tuvo impactos mixtos. Por un lado, se fortaleció el diálogo con algunos actores del nivel nacional —especialmente en temas de infraestructura portuaria—, pero por otro, se amplió la brecha con las comunidades locales. Los consejos comunitarios afrodescendientes, históricamente relevantes en la defensa del territorio, manifestaron su inconformidad ante la falta de inclusión en los procesos de planeación y toma de decisiones. Esta exclusión ha generado tensiones que debilitan la gobernanza.

De igual forma, las relaciones con el sector empresarial y portuario continúan siendo asimétricas. Mientras los intereses económicos nacionales orientan la política de desarrollo, la administración distrital carece de herramientas de negociación efectivas para equilibrar el beneficio público y privado. El resultado ha sido una gobernanza fragmentada, donde las redes de poder se concentran fuera del control del gobierno local.

En el plano institucional, la Ley 1617 intentó introducir una cultura de gestión moderna, pero no logró modificar las prácticas clientelares ni la debilidad del control interno. Las relaciones intergubernamentales con el nivel nacional siguen siendo verticales y asistenciales, evidenciando que el régimen especial no modificó sustancialmente las jerarquías políticas ni la dependencia fiscal del distrito. En síntesis, los cambios institucionales fueron más nominales que efectivos, y los impactos en las relaciones de gobernanza reflejan una autonomía incompleta y una participación social debilitada.

Conclusiones

La Ley 1617 de 2013 se concibe como una apuesta estratégica dentro del proceso de descentralización en Colombia, en la medida en que otorga a los distritos especiales un conjunto de instrumentos para transformar su institucionalidad político-administrativa, profundizar la democracia y la participación ciudadana, y promover mayores niveles de desarrollo y bienestar social. En este marco, Buenaventura es llamada a ejercer un rol protagónico: el gobierno distrital, en articulación con otros actores institucionales y sociales, está llamado a fortalecer su capacidad para liderar políticas públicas en materia de seguridad y convivencia ciudadana, sustentabilidad ambiental, seguridad alimentaria, equidad territorial y gestión del desarrollo. Sin embargo, la implementación del régimen especial revela con claridad los límites de una descentralización que se concibe normativamente avanzada, pero

que se despliega sobre un territorio caracterizado por profundas debilidades estructurales.

El diseño de la Ley 1617 parte del supuesto de que la administración distrital posee las capacidades necesarias para asumir nuevas funciones y competencias, sin considerar que Buenaventura ha enfrentado históricamente serias dificultades para consolidarse como ciudad y como entidad territorial con institucionalidad robusta. El régimen no incorpora mecanismos efectivos de fortalecimiento institucional ni prevé recursos fiscales adicionales proporcionales a las nuevas exigencias, tampoco asegura un acompañamiento técnico sostenido por parte del Gobierno nacional. Ello derivó en una adopción principalmente formalista del modelo distrital, donde la creación de entidades y figuras, como las localidades y la autoridad ambiental, no se tradujo en mejoras sustantivas en la capacidad estatal ni en el ejercicio de una gobernanza más inclusiva.

La caracterización socioeconómica y política del distrito muestra la persistencia de un patrón de exclusión estructural: altos niveles de necesidades básicas insatisfechas, pobreza, desempleo, informalidad, precariedad en la prestación de servicios públicos y una inserción subordinada en la economía nacional bajo la lógica de enclave portuario. A ello se suman el conflicto armado, las economías ilegales, la captura institucional por grupos de interés, la baja cultura tributaria y las deficiencias del modelo de gestión pública. Este entramado configura una “trampa de bajo desarrollo” que limita la capacidad organizativa de la comunidad, aumenta su vulnerabilidad y restringe el impacto redistributivo del régimen especial. En este contexto, la descentralización sin fortalecimiento real de capacidades genera frustración social, alimenta el descontento ciudadano y profundiza la crisis de legitimidad de las instituciones locales.

La división del territorio en localidades —prevista como mecanismo para acercar el Estado a la ciudadanía y promover una gobernanza multinivel— avanzó de manera tardía e incompleta.

Aunque en 2014 el Concejo Distrital aprobó dos localidades urbanas y estas contaron con alcaldías locales solo hasta 2017, la conformación de localidades rurales permanece pendiente, reflejando tensiones entre la administración distrital, los consejos comunitarios y los cabildos indígenas, así como una histórica desconfianza hacia la dirigencia política. Esta implementación parcial evidencia la ausencia de un proceso de transición escalonado y de aprendizaje institucional que permitiera dotar a las localidades de estructuras flexibles, capacidades de coordinación y funciones claras en la mediación entre ciudadanía y gobierno.

En materia ambiental, la Ley 1617 faculta la creación de una autoridad ambiental para las áreas urbanas y suburbanas, pero estas representan una porción marginal del territorio distrital. La conformación del EPA Buenaventura, con jurisdicción limitada, plantea dudas sobre su capacidad para incidir en la gobernanza integral de la biodiversidad del distrito y exige una estrecha articulación con la CVC y el Sistema Nacional Ambiental. La fragmentación de competencias y la debilidad de los arreglos de coordinación reducen el alcance efectivo de la gestión ambiental local, reforzando la brecha entre el diseño institucional y las necesidades del territorio.

En suma, el caso de Buenaventura evidencia los límites del régimen distrital como estrategia de fortalecimiento de la gobernanza local cuando éste no se acompaña de un proceso robusto de fortalecimiento institucional, soporte fiscal y coordinación multinivel. La centralización de las decisiones estratégicas, la persistencia de la pobreza y la exclusión, junto con la implementación exegética de la norma —basada en la creencia de que el cambio jurídico por sí solo transforma la realidad— han impedido que la Ley 1617 constituya un instrumento efectivo de transformación territorial, política y social. De manera propositiva, la experiencia de Buenaventura sugiere que cualquier proceso futuro de conversión de municipios en distritos especiales debe sustentarse en diagnósticos previos rigurosos, en estrategias progresivas de desarrollo de

capacidades administrativas y políticas, en el fortalecimiento del talento humano y de la autonomía fiscal, así como en la construcción de auténticos mecanismos de gobernanza multinivel que articulen Estado, sociedad civil y sector privado. Más que nuevos arreglos normativos, se requiere dotar a los gobiernos locales de las condiciones reales para ejercer su autonomía con eficacia, legitimidad y responsabilidad.

Referencias

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building State Capability: Evidence, Analysis, Action*. Oxford University Press.
- Healey, P. (1997). *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies*. Macmillan Press.
- Jessop, B. (2004). *Hollowing out the State*. *Political Geography*, 23(3), 335–356.
- Mayntz, R. (1999). *Governing Failures and the Problem of Governability: Some Comments on a Theoretical Paradigm*. In Kooiman, J. (Ed.), *Modern Governance*. Sage.
- Prats, J. (2005). *De la administración pública a la gobernanza pública*. CLAD Reforma y Democracia, 32.
- Varela, E. (2015). *Capacidades institucionales y gobernanza territorial en Colombia*. Universidad del Valle.
- Rincón, J. (2019). *Descentralización y poder local en Colombia*. Universidad Nacional de Colombia.



Epistemología sobre la filosofía, las ciencias y los estudios políticos y jurídicos: Campo interdisciplinar¹

Epistemology on Philosophy, science, and Political and legal studies: Interdisciplinary field

JAHIR A. GUTIÉRREZ-OSSA²
PORFIRIO CARDONA-RESTREPO³

Clasificación PUBLINDEX-MINCIENCIA: Artículo de Reflexión

Recibido: diciembre 2024

Aceptado: junio 2025

Resumen

Este escrito de investigación expone el carácter epistemológico de la filosofía, las ciencias y los estudios políticos como campo interdisciplinar. El paso por el Doctorado en Estudios Políticos y Jurídicos de la Escuela de Ciencias Políticas y de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, permitió postular dicho escenario. Se toma como referencia a la epistemología, toda vez que, representa el punto de partida para llevar a cabo el proceso metodológico o la base para la creación de conocimiento o para consolidar procesos de investigación que conduzcan a productos específicos, postulado que refuerza la idea de tener fundamento epistemológico en cualquier tema y ello, fue lo logrado con dicho campo disciplinar a través de las áreas que lo representan.

Es evidente, que la triada filosófica, científica y de estudios de lo político y lo jurídico; refuerzan la capacidad explicativa de estas, además del tenerlas como referencia a la hora de abordar temáticas en particular, e incluso, dar respuestas a temáticas políticas, programas,

1 Artículo de investigación producto de la tesis doctoral "POLÍTICAS PÚBLICAS ESTATALES EN COLOMBIA DESDE EL ENFOQUE BASADO EN DERECHOS HUMANOS" desarrollado en el Doctorado de Estudios Políticos y Jurídicos de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Medellín bajo la línea doctoral: Teoría Política y Epistemología. Con el apoyo del Grupo de Investigación en Estudios Políticos en la línea de investigación "Gobierno, territorio y seguridad" y del Grupo de Investigaciones en Derecho conforme a la línea de investigación "Relaciones internacionales, derecho internacional y derechos humanos", ambos de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín.

2 Doctor en Estudios Políticos y Jurídicos en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Departamento de Antioquia en Colombia. Doctor en Administración Pública, Atlantic International University, Honolulu, Estados Unidos de América. Magister en Desarrollo, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín. Economista Industrial, Universidad de Medellín, Antioquia, Colombia. Miembro, Academia Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC - 2019). Par evaluador, Observatorio de Ciencia y Tecnología de Colombia (OCyT). Miembro Grupo Latinoamericano por la Administración Pública (GLAP) y del Laboratorio Nacional de Políticas Públicas de Colombia. Investigador senior, Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia (Colciencias), email: jahiralexander.gutierrez@upb.edu.co, (<https://orcid.org/0009-0003-2029-6435>)

3 Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia Bolivariana. Fue director de la Facultad de Ciencias Políticas donde actualmente se desempeña como profesor Titular, Coordinador del Doctorado en Estudios Políticos y Jurídicos, director de la revista *Analecta Política* y Coordinador Académico de la Universidad Pontificia Bolivariana ante el Instituto Colombo-Alemán Para la Paz Capaz-. Es Investigador Asociado en Mincencias, miembro de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política Alacip-, Asociación Colombiana de Ciencia Política Accpol-, Asociación Iberoamericana de Filosofía Política AIFP-, Red Nuevas Perspectivas de la Teoría de la Cultura y la Red Estudios Latinoamericanos de Medellín y Antioquia (RedLaM/RedLAN). email: porfirio.cardona@upb.edu.co, (Orcid: 0000-0001-5648-994X)

planes o proyectos al hacer reparos sobre su base filosófica, su criterio científico y la justificación práctica que implican los temas.

Palabras clave: Epistemología, Ciencia Política, Derecho, Filosofía Política.

Abstract

This research paper exposes the epistemological character of philosophy, science and political studies as a disciplinary field. Passing through the doctorate in political and legal studies at the school of political sciences and law of the Pontifical Bolivarian University, allowed us to postulate this scenario. Epistemology was taken as a reference, since it represents the starting point to carry out the methodological process or the basis for the creation of knowledge or to consolidate research processes that lead to specific products, a postulate that reinforces the idea of have an epistemological foundation in any topic and this was what was achieved with said disciplinary field through the areas that represent it.

It is evident that the philosophical, scientific and political and legal triad of studies; They reinforce their explanatory capacity, in addition to having them as a reference when addressing particular topics, and even providing answers to political topics, programs, plans or projects when making objections about their philosophical basis, their scientific criteria and the practical justification. that the themes imply.

Keywords: Epistemology, Political Science, Law, Political Philosophy.

Introducción

La integración entre la filosofía, las ciencias y los estudios de lo político y jurídico centra el interés de este escrito. La trilogía, tiene la posibilidad de hacer entendibles las circunstancias, fenómenos y hechos de naturaleza política - jurídica. Por ello, se recurrió a la vinculación entre

la epistemología, el carácter investigativo y el enfoque aplicado de la triada con la idea de corroborar el papel de la filosofía política y jurídica como base del pensamiento interdisciplinar, el carácter científico de ambos frentes de trabajo, y la capacidad que de ellos se desprende para enfocarse en el estudio de casos. Se asume a partir de la experiencia doctoral, la relevancia de este campo interdisciplinar.

Se vinculó el componente epistemológico a la relación de la filosofía política y jurídica, con el propósito de reconocer los mundos que generan las ideas de las temáticas tomadas como referencia, y de como ellas, luego de sus diversas connotaciones analíticas, críticas o consensuadas del pensamiento terminan generando conocimiento. Este punto de partida, conlleva a exponer en esencia, que la forma como se crean las ideas, el pensamiento y el conocimiento sobre una temática desde lo político y jurídico clarifican la intención inicial del caso escogido, pero a su vez, allanar las distintas formas como fueron concebidos y, si estos logran al inicio mostrar un punto de partida.

En virtud de las ciencias políticas y jurídicas, se afianza la posibilidad de considerar la temática escogida como fenómeno científico concebido desde las evidencias, los hechos o la manera como al final termina reproduciéndose el conocimiento que al ser generalizado se convierte en carácter científico. En este frente, la superposición de escuelas de pensamiento, la fundamentación teórica o el propio estado del arte, referentes de la mano con lo conceptual, sirven de criterio para darle fuera a la temática política - jurídica escogida que paso por el mundo de las ideas o del pensamiento, y que ahora, se mide en cuanto a su desarrollo como material científico.

Le correspondería a los estudios políticos y jurídicos, dar cuenta de la línea de pensamiento, la generación de conocimiento y la importancia referencial del tema escogido para consolidar la intención del llevar casos, problemáticas o temáticas que tendrían la opción de ser acogidas como un asunto que efectivamente cumple las

características para ser conducida por parte de la triada desde la filosofía y las ciencias, y finalmente, poder exteriorizar que dichos estudios logran abordar temas que vienen del mundo de las ideas, que han sido concebidas en generación de conocimiento y, que para su afianzamiento, son llevados a casos como material de estudio político - jurídico.

Para poder corroborar lo expuesto en cada uno de los párrafos entrelazados en la introducción, a continuación se materializan los acápites que sirven de base para cumplir el propósito de campo interdisciplinar de lo político y lo jurídico: En primer lugar, la relación epistemológica interdisciplinar entre la filosofía política y jurídica para la creación de conocimiento, segundo, la generación de conocimiento desde la fenomenología de las ciencias políticas y jurídicas, y finalmente, la investigación temática sobre los casos de estudios políticos - jurídicos interdisciplinarios. La trilogía, tiene la capacidad de responder a las temáticas doctorales y de distintas áreas del saber.

Relación epistemológica de la filosofía política y jurídica para la creación de conocimiento

Este acápite está dirigido a explorar sobre la epistemología de la filosofía política y jurídica para la creación de conocimiento. Desde esta prerrogativa, se hizo indagación sobre los frentes que desde la ciencia del pensamiento o la sabiduría como es la filosofía, hacen posible la interacción de ambos referentes de trabajo, sin desconocer, que por varios años se presentaron sendas distancias de la una para con la otra bajo preceptos enciclopedistas o positivistas que incluso, condujeron a las premisas sobre las cuales más que cercanía había dilaciones entre ambas para no trabajar conjuntamente a pesar de sus orígenes comunes, pero que dadas las circunstancias, han vuelto a ser unidas.

La ruptura epistemológica de Hobbes, quien rompe con el derecho divino o la providencia, poniendo la filosofía al servicio de los hombres o la forma como estos entienden la fuerza, el poder y racionamiento, serían los elementos iniciales para dar cuenta de una filosofía pragmática (Espinoza, 2023). Según este autor, Hobbes nos ubica dentro del contractualismo y la confianza en la razón, desde la capacidad de los hombres para llevar a cabo sus ideas y ponerlas a disposición al ejecutarlas para su beneficio, eventos que sirvieron para denotar la forma como en adelante se entendería la filosofía política y jurídica como una especie de estados de choque o fuerzas de libertad.

El reconocimiento de Hobbes como el primer filósofo moderno motivado por el racionalismo de la época para el que la filosofía política y jurídica tendría que dar respuesta (Ruíz, 2018). Desde esta óptica el trabajo abordado por el método científico expresado por las ideas de Copérnico y Galileo, darían tránsito a la posibilidad de explicar el mundo de los hombres, y que mejor manera, que sobre el papel explicativo de las distintas filosofías como era de esperarse desde la óptica política para luego con la modernidad la jurídica. Es decir, que la ruptura del poder sobreviniente con las ideas de Hobbes, darían paso a la filosofía política y jurídica como corrientes primigenias.

Esponda (2017) señala con vehemencia la contradicción que cierne el justificar la importancia de la filosofía para con las ideas, el pensamiento y la creación del conocimiento. Según él, al parecer el tiempo ha jugado en contra de la filosofía conforme a la dinámica y los tiempos que sobrevienen para la sociedad, para lo cual, esta área no resuelve nada. No obstante, Esponda, insiste en la importancia explicativa que cumple la filosofía para con lo político y jurídico, elevándolo incluso a un carácter ético en la medida en que ambas áreas terminan apoyándose en ausencia o falta de la otra. No obstante, cuando las dos fallan, la filosofía tiene capacidad de apoyo en ambas.

Para no develar una especie de imposición a la fuerza entre lo político y jurídicos, se toma de referencia el fundamento epistemológico que de forma transversal aleja de la discusión de la importancia o no de un área del saber y la ponga a escala de su utilidad. Empero, es de entender que, si bien la filosofía podría defenderse por sola, el arrinconamiento que sobre ella ha acumulado tiempo además del aislamiento que ha padecido por otras áreas y la aparente capacidad explicativa de ideas, fenómenos o hechos actuales, motivo para que la epistemología tomase la bandera para entender lo que sucede en cuanto a la interacción de la filosofía política y jurídica interdisciplinar.

La epistemología es definida por (Cerra, 2022) como el referente más exitoso de la filosofía en cuanto a la política sobre los hechos y del derecho en cuanto a los referentes fácticos, los cuales son llevados a comprobación, pruebas o validación para los cuales la heurística y la hermenéutica de forma reciproca hacen posible que de ellas emerja la creación de ideas, la formación de conocimiento o se prosiga a la toma de casos para el análisis. Las dos son agrupadas para dilucidar argumentos de verdad con los cuales sostener las ideas para luego pasarlas a la discusión crítica para conducir las a la creación de conocimiento, lugar desde donde ellas se convierten en puntos de partida de análisis.

Para el afianzamiento del análisis la epistemología representa el portal desde el que se abre el camino para poder cimentar las ideas, el pensamiento y el posible conocimiento que sostienen los temas que se llevan a lo político y jurídico en la triada concentrada en principio desde la filosofía, y que al resolver desde allí, pasa a método científico o de investigación, para luego, postularse como estudio, trabajo de campo o caso de análisis a la hora de advertir si han cambiado las ideas encubadas en lo político-jurídico, o si se trata de un tema que por su novedad requiere ser originado desde la triada centrada en el artículo, sin embargo, la epistemología adquiere relevancia aun bajo pocas o nulas ideas.

La epistemología constituye una de las áreas más fructíferas de la filosofía. De su considerable influencia, que penetra en diversos ámbitos del conocimiento humano, no parece escapar el derecho. En este artículo se pretende mostrar cómo en el ámbito jurídico existe un componente epistemológico que guarda íntima relación con los hechos en el derecho, esto es, con sus elementos fácticos, así como en los estadios de la verdad y la manera cómo y dónde es posible alcanzarla a través de medios de prueba idóneos. La metodología empleada es descriptiva on uso del método hermenéutico de textos jurídicos y filosóficos.

Es responsabilidad de la epistemología dar cuenta de las ideas preconcebidas sobre las ideas, la creación o generación de un conocimiento específico y de ello, tener la capacidad para confrontar si dichas ideas preconcebidas a un se mantienen vigente o han venido cambiando (Guacheta y Rojas, 2020). Es este grupo de tareas, se esgrime la capacidad para de nuevo señalar que la epistemología, es la ciencia de las ciencias toda vez que busca dar guía, lineamientos u orden a lo que en apariencia emerge de manera desordenada o, que no logra explicarse por si misma. De allí que, lejos de una posición crítica epistemológica, tiene un claro propósito articulador del pensamiento.

Guacheta y Rojas (2020) tienen preocupación sobre las posibilidades de las epistemologías correctas o incorrectas. Por ello, recurren al principio sobre el cual es importante en la epistemología a partir de las ideas concebidas, innatas o preconcebidas, no con el ánimo de reafirmarlas, sino de pasarlas a comprobación por parte de este recurso analítico. De esta premisa de los autores se entiende que la epistemología posibilita la separación entre las ideas correctas de las incorrectas para evitar con ello versiones apresuradas, poco coherentes o con carencia de invalidez en cuanto al tema llevado a revisión epistemológica para luego, postularla como posible conocimiento.

Para la creación de posible conocimiento, (Castro y otros, 2021) indican la trascendencia del saber epistémico, el cual pasa igualmente por pruebas sobre la base de los paradigmas, los métodos de investigación o los teoremas de falsación o verdad. Es decir que, la epistemología sirve para depurar el conocimiento mas que para descartar una idea sobre otra, para poder justificar cuál de ellas puede ser más valida, a la hora de refrendar o generar un nuevo conocimiento. Por ende, se considera que la epistemología además de preparar los elementos de base para la consideración de algún tema específico al paso de su evaluación también hace revisiones metódicas de las temáticas.

Se urge precisamente, que la epistemología pase a revisión cada vez que se lleve a cabo la postulación de ideas, problemas o temáticas, dado que se da por sentado a la luz del método científico o de las metodologías, cuando estas son el fruto de lo elaborado en la epistemología. De aquí que, la referencia que se hace en materia de la relación de esta última con la filosofía exhibe el escenario sobre el cual se concibe que el conocimiento pasa por un proceso de rigurosidad al paso de las ideas, el pensamiento o cuando se crea finalmente, pero que, a diferencia de otras formas de conocimiento, la epistemología es método y campo de conocimiento, dado que toma el todo, para hablar de lo particular.

Martin y Morgan (2011) hablan del desgaste presentado por varios años frente a la divergencia, incompatibilidad o no trabajo conjunto entre lo político y jurídica. Tal es así que, ambos autores insisten que hubo procesos dedicados a mostrar más las diferencias que cercanías, que, para ellos, solo comienzan a aflorar de manera reciente. El acercamiento que ellos destacan obedece a las circunstancias que han obligado para que ambas áreas de formación respondan en eventos desde los cuales no logran responder por si solos, y a ello abonan, el papel cumplido por corrientes integradoras para dar fuerza a un terreno que al parecer de manera conjunta son más eficientes.

La eficiencia que destacan los autores, Martin y Morgan, hacen referencia a la forma como los hacedores de política hacen uso de la legislación para sacar adelante sus iniciativas de política, y como los jueces, toman decisiones desde las leyes que emanan del legislativo con carácter político. Se presenta, una especie de elementos facultativos para poder trabajar con ambas con la idea de que en ambos frentes se pueden dar elementos filosóficos que enriquecen el proceso, punto de referencia en el que el mundo de las ideas, del pensamiento o la consecución de norma también responde a principios normativos y positivos además de ilustrativos que tienen alta carga epistemológica.

En otra perspectiva Seneff (2008) destaca que en la epistemología afloran ideas científicas, dialógicas, institucionales, ontológicas y reflexivas que terminan encumbradas en políticas públicas caracterizadas por lógicas ahistóricas, de tratados o visión teleológicas o entelequias. Para el autor, la epistemología viene también siendo influenciada por las posturas ideológicas, y por ello, hay que tener capacidad para depurar elementos que puedan distorsionar el propósito de la epistemología por corrientes, desviaciones o ideologías que podrían pervertir el papel de dicha herramienta, pero que no deja de ser inquietante, que aun dichos elementos deben ser contemplados.

Seneff, pone en duda la fuerza de la epistemología para resolver problemas de las ideas, del pensamiento o de la razón de lo político y jurídico, por el cuerpo de referencia que advierte y que según él, pervierten las capacidades de dicho fundamento filosófico para lograr caminos certeros a la luz de los argumentos, criterios o principios que se requieren para dar cuenta del paso de las ideas al pensamiento y posteriormente al conocimiento de manera concreta, sin aún reparos de otra naturaleza, pero que debe llegar en principio fuera de criticismo o dualismo (Cárdenas y Guarín, 2008), porque se asume que, ya se pasó por ello, a medida que avanzaron en las distintas epistemologías.

Mirabel (2019), expone que existe claramente una filosofía política y jurídica previa a la moderna, preservadas desde el contractualismo para luego pasar al positivismo, luego, la metafísica, para luego pasar a la experiencia y la razón. En ello, se renueva la discusión entre el iusracionalismo colectivo frente al individualismo, no obstante, el intelectualismo o el racionalismo resuelven problemas filosóficos que están atados a la voluntad o la conveniencia. En esa medida, Mirabel advierte a las filosofías que lo político y lo jurídico esta permeado de distintos frentes que deben ser considerados y que no logran por su magnitud de plantear ideas concretas, matizadas o puras en sí.

Mirabel, materializa el interés de exponer la capacidad que tiene la unión de la filosofía política y jurídico para dar cuenta de diversas ideas, pensamiento y generación de conocimiento sobre temas de interés. Destaca que si bien, ya no se entiende como un escenario expedito para lograr el mejor análisis debe realizarse para establecer efectivamente que ya no se trata de una discusión conceptual, y que por cuenta de dichas diásporas temáticas, se requiere afianzar dicha relación que para este autor también admite temas que no eran considerados filosóficos, políticos o jurídicos individualmente y menos cuando se consagran a la hora de integrar estos tres frentes, mostrando, que efectivamente se revive el papel de la filosofía política y jurídica.

Es fundamental para reconectar la realidad con el conocimiento generado a través del tiempo el paso por la revisión de la filosofía política y jurídica, que lejos de las divisiones que las clasifican o separan hablan de un cuerpo de análisis completo y complejo. Y de allanarse uno u otro tema disipado por la intervención de cualquiera de estas conforme a la visión de la filosofía política o la filosofía jurídica, debe correr por cuenta del analista el analizar la correlación entre ambos frentes cuando se coligan en la filosofía política y jurídica, que no es un tema menor, toda vez que es la forma completa de entender la forma como las ideas tienen varios frentes a la hora de ser creadas

El grueso de autores trabajados en este acápite demuestra, que no en vano se viene desarrollando análisis, documentos científicos o estudios que aboquen a la formalización de la filosofía política y jurídica de ideas, pensamientos y creación de conocimiento interdisciplinar en los distintos temas que sean de apropiación, balance o sustrato no solo desde el doctorado del cual se partió para llevar adelante la inquietud sobre la trayectoria de lo político y jurídico desde sus raíces, sino de otras áreas que desde frentes de áreas básicas, científicas o exactas urgen de un criterio blindado desde la filosofía política y jurídica que pasaría aportas de las ciencias políticas y jurídicas.

Generación de conocimiento desde la fenomenología de las ciencias políticas y jurídicas

El propósito en este punto del artículo de investigación, se sujeta al carácter científico de los fenómenos políticos y jurídicos. Se habla de ciencias políticas y jurídicas indistintamente de forma plural o singular, haciendo a un lado la impronta de ello, dado que el primero invita a la relación con otras ciencias, y el segundo, a preservar las bases de estas. En el caso de las ciencias políticas y jurídicas se trata de considerar como estas crean conocimiento al unísono, y de no lograrlo, como resuelven los problemas que afrontan, pero también, si gozan de las condiciones para hacerlo o resolverlos, de ahí, que se ventila la posibilidad de hablar tanto del plural como del singular sobre ellas.

El conocimiento aparece cuando se comprueba, evidencia o valida lo logrado en su generación filosófica política y jurídica. En dicha medida, este se reproduce de diferentes maneras con la idea de que al lograr la denominación de conocimiento la difusión de este hace parte de los principios que lo cataloga como tal, a su vez, cuando se generaliza o se vuelve parte de las discusiones permanentes sobre los estados de la cuestión que se está planteando. Para Garzón (2009), la diferencia entre la filosofía de la ciencia

política y jurídica, es que la primera deslumbra con el deber ser de los asuntos los considerados en tanto la segunda, se encarga de describir o explicar lo que sucede.

Para Friedman (1971), tanto la ciencia política como la jurídica responden a temas similares y utilizan métodos de igual referencia para atacar problemas de naturaleza que les incumbe. Para él, las dos ciencias pueden tener una mirada distinta desde sus puntos de referencia, pero al conjugarse se pretende que se conllevan para que lleguen a un lugar común. Es decir que ellas tienen puntos de referencia que los obligan a trabajar mancomunadamente, escenario que revierte cualquier concepción diferente a tener una mirada aislada de una u otra ciencia., de aquí, se resuelve que el mundo de las ideas, el pensamiento y la creación de conocimiento debe pasar por los distintos métodos.

Es de reconocer como implica Friedman, que la revisión de las ciencias políticas y jurídicas contiene métodos que surten a una y otra ciencia, pero igual, a su configuración como una sola ciencia. La dificultad o problemática radica en poner en evidencia los métodos que acompañan a la combinación de dichas ciencias. Es lo que ha faltado precisamente a las ciencias sociales, disponer de material conjunto para poder entender lo que sucede con los problemas llevados a procesos de investigación. Por ende, se requiere un trabajo fuerte que promueve el desarrollo metodológico de las ciencias políticas y jurídicas, que, en principio, debería ser el centro del debate de las temáticas.

En la alianza de las ciencias políticas y jurídicas se entrelaza los modelos, normas y principios a la par que los marcos que explican la naturaleza de la una y la otra de manera individual. Doctrinas o dogma, en cualquiera de ellas, se reproducen como criterios sobre los cuales hacer extensión de los criterios científicos para ambas. Es decir, que, en esencia, busca explicar los sucesos dentro de su ámbito de control o desde la capacidad que tienen para sustentar lo que implica un proceso político para la primera o insuce-

so jurídico para la segunda. Empero, cuando se habla de las ciencias política y jurídicas se habla de una posición doctrinal reciente que requiere su propio discurso.

La relación entre ambas ciencias comenzó siendo zanjada por Ferrajoli (2018) que de forma categórica da cuenta que la política en cualquiera de sus versiones ha impedido ser sometida al derecho. Empero, pero también recuerda que la economía tampoco ha permitido que la política asuma la bandera de los análisis, las ideas, el pensamiento o la generación de conocimiento. Ferrajoli, afirma que esta doble subordinación, debería ser estudio de la filosofía política y jurídica, pero que en ningún caso se asoma una explicación clara. No obstante, reconoce la relación artificial entre la política y el derecho en el que la primera ha terminado por convertir en instrumento a este último.

Ferrajoli, señala que la política tiene claro el quehacer del derecho para con las prioridades de la nación, y que el ámbito de relación entre ambas pertenece al Estado a la hora de promover soluciones a través de la legislación. De allí que, el derecho se convirtió en la acción y el lenguaje de la política, escenario que el autor distingue como la emersión de la modernidad jurídica para la creación de diversas reglas o pactos. Así que, la política sigue siendo el eje articulador de la capacidad que tiene el derecho para contribuir a las diversas dimensiones que recorren conjuntamente, consideración sobre la que se podría pensar que la política es boca de ley, restando exclusividad a la justicia.

Díez (2018), expone para la concepción del método de la ciencias jurídicas la consideración de metodologías aplicadas y académicas. De las aplicadas, sugiere llevar a cabo reglas de racionalidad para lograr resultados científicamente aceptables, y las aplicativas, para ordenar lo obtenido en la primera de forma sistémico. Cuestiona el autor, que este último ha sido mucho más desarrollado que lo concerniente a lo racionalmente científico. Estas consideraciones, indican que aún las ciencias jurídicas por si so-

las adolecen de fundamentación científica, por encima, de la posición dogmática que abriga la formación jurídica desde el positivismo, ambiguo a la ciencia.

El análisis científico que hace Díez, reconoce las distintas formas de abordar el componente científico de lo jurídico desde la racionalidad y la organización sistémica. No obstante, es poco creíble que no se admitan los procesos formados bajo la evidencia empírica, la praxis o incluso las experiencias de campo o de estudios de casos. Esto significa, que la posición positivista lo que ha permitido es dejar abierta el resto de opciones metodológicas para resarcir a las ciencias jurídicas. Ciencia, disciplina o práctica, es importante materializar los métodos de la ciencia jurídica, a su vez que las metodologías, superando la visión categorial o cualitativa de las ciencias sociales.

Rodríguez (2016) promueve la idea sobre la cual el dogma jurídico atado a la racionalidad jurídica sin consideración de hechos no jurídicos, centrado en su propia estructura perdió sentido hace tiempo. La lógica-formal, fue la base que acompañó el desarrollo de la formación pura del derecho, de la jerarquía de las normas o de la creación de estas. Todos estos elementos tomados como una sola y única referencia es un hecho que ha impedido que se muestren por ejemplo el poder de las fuentes del derecho en cualquiera de sus consideraciones formales, los criterios auxiliares, las disciplinares, materiales o reales que inducen a revisar diversos métodos de la ciencia.

En los apuntes que agrega Rodríguez, indica que es imposible hablar de un método y metodología de las ciencias jurídicas no pueden desarrollarse sin el apoyo de otras disciplinas, entre las que se cuentan las ciencias políticas, que, para el autor, sirvió de base para fortalecer a las ciencias jurídicas con la creación del Estado en primera instancia. Esta premisa, refrenda la idea sobre la cual se extiende la aseveración que cuestiona que el derecho o la formación jurídica parece inerte ante lo que sucede con los hechos que le dan origen y más cuando estos no tienen procedencia jurídica sino de otros frentes que

también deben ser de interés para la concreción de la ciencia jurídica.

Para Hernández (2020) el derecho es una ciencia congelada y por ende lo jurídico, toda vez que no tiene en cuenta los episodios de caos, incertidumbre o riesgos, además que los trata de cosificar en marcos jurídicos poco consecuentes con las realidades que deben atender, de allí, la simpleza de la formación jurídica para considerar episodios diferentes a los escritos o los hechos ya pasados. Sin embargo, habla de la imposibilidad de sustituir al derecho o la ley por otro frente de trabajo, y se basa en esa misma crítica para aseverar que su inmutabilidad a la larga es una cualidad para su no sustitución por otras áreas del conocimiento. Por ende, aboga por una legislación predictiva o de futuro.

Es clara la invitación que hace Hernández de continuar con la senda entre la relación que se ha dado con la evolución del conocimiento sobre las diferentes ciencias. De ellas, la física o las formas de entender el comportamiento físico con el concurso de las ciencias básicas y exactas, ha permitido entender que las ciencias sociales no están ajenas a estos cambios, y que por cuenta de ello, lo que se presentan son movimientos a través del tiempo que las hace considerar inerciales, movibles o que generan presión o fuerza en otras áreas del saber (Gutiérrez, 2020). Significa, que no se puede hablar de rezago de la ciencia jurídica sino de inercialidad comparativa con la dinámica política.

Gutiérrez (2020) es mucho más directo al expresar que el derecho se ha convertido en una técnica operativa en la que solo interesa la práctica jurídica o legal, basadas en respuestas prefabricadas dispuestas como praxis, pero no están acostumbrados a formular por su cuenta análisis racionales ni formulaciones previas, que a su modo de ver lo consideran un lujo que en nada incrementa el valor o el peso de la acción jurídica, y peor aún, las señalan de ser una área de conocimiento que goza de academicista que en nada o poco aporta al jurista precisamente por la visión formal mecanicista. Por ende, el

autor, indica que el camino para recambiar dicha situación es con las ciencias políticas.

El cúmulo de cuestionamientos al derecho o mejor a la formación jurídica en derecho no se ha hecho esperar. Desde diversos ámbitos, se recrea la inoperancia, efectividad o impactos y resultados que debería traer la legislación en el derecho (Becker,1967). De normas arcaicas o que no cumplen las razones o el propósito por las cuales han sido creadas o la propia desnaturalización del derecho a la hora de atender, entender y poner en práctica casos interdisciplinarios, coinciden en analizar que al igual que, el juez es boca de ley, el jurista o abogado, es un replicador de esta, y que, en nada, le interesan los esfuerzos académicos o investigativos para fortalecer aun las bases que se repiten con frecuencia.

Becker (1976) deja algo en claro en materia de fortalecimiento de las áreas de conocimiento que aquí se suman como son la política y lo jurídico. Para él, la perspectiva contemplada para la consagración de estos dos frentes de trabajo no pasa por esperar las respuestas desde el derecho, sino de dejar espacio para que las razones que provienen de manera aleatoria de diversos ámbitos sean los conductores del derecho que se reclama o se requiere contemplar, dejando a un lado la idea que, el derecho tiene todas las respuesta e incluso dice que no tendría sentido responder de nuevo solo del derecho como completando una tarea, reitera entonces, que sea desde las razones que los solicitan.

Por ende, aquí se trata de consolidar la idea que las ciencias en cualquiera de sus versiones apuntan al estudio de fenómenos con el propósito de ventilar criterios científicos, y que de no lograrlo, pasan a ensayos o pruebas (Amezquita,2008). No obstante, lo que más se valora es como se crea el conocimiento, como en su defecto pasa en las ciencias básicas o exactas, que más que buscar la verdad, tratan de solucionar problemas. Para ellas, los espacios de incertidumbre, caos o riesgos hacen parte de los eventos que debe surtir el ser humano, y por ende, recurre a la ciencia para poder atender, entender

y proveer elementos con los cuales atender los vacíos que se ciernen en dichos eventos.

Es importante connotar de igual forma, que, a las ciencias políticas y jurídicas, podrían sucederle lo mismo en cuanto a la apreciación que se tiene de la generación de ideas o pensamiento para las filosofías políticas y jurídicas, y es que, el conocimiento creado necesariamente no resuelve nada o implica que carece de repercusiones en la realidad. Ambas percepciones, es lo que ha debilitado la capacidad del campo de investigación que las abriga, toda vez, que se requiere hacer un balance claro de cualquier propuesta temática antes de llevarse a la práctica, de ahí el paso por la filosofía y las ciencias(Guzman,2008), estas dos últimas, deben pasar por la prueba de la mediación práctica de los estudios.

Investigación temática sobre los casos de estudios políticos - jurídicos interdisciplinarios

En este punto del escrito de investigación se hace referencia al papel que cumplen las temáticas que se adhieren a los estudios políticos - jurídicos interdisciplinarios. En dicho frente, se destacan los casos, estudios o trabajos de campo que ameritan el trabajo conjunto de las dos áreas de estudio con la idea que la naturaleza del objeto que asumen como material de trabajo obligan una mirada mucho más propositiva de ambos frentes. En esencia, se trata de mostrar que los estudios como los otros frentes considerados en la filosofía y las ciencias también han tenido dificultades, pero que en esencia se demuestra que el puente de este campo radica en la tipología de estudio escogido.

Fink (2016) expresa que no encuentra punto de referencia entre los estudios políticos y jurídicos con las ciencias política y jurídicas, toda vez que, por las razones que le han dado origen a cada una de ellas, que dejaron entre ver entre otras, que sus ámbitos de estudio eran diferentes, no necesariamente complementarios por la división de poderes e incluso podrían ser antagónicos, en

la medida, que son dos corrientes que tendrían una mirada distante de lo que implica el poder o los derechos en cada una de sus instancias, y fuera de lo común, los terminaría uniendo la visión positivista en la medida que estas tendrían la capacidad de explicar fenómenos o casos sin la incumbencia de la otra.

Se destaca que la tarea de unir lo político y lo jurídico, no ha sido un tema fácil para ninguna de las partes que pretenden dejarlos como están o presentar cambios para su complementariedad. De allí, la relevancia de reconocer que han sido los acontecimientos, los eventos o hechos los que promueven un acercamiento entre ambas, por ende, lejos de una solución negociada entre ellas, los factores externos representan el empuje que los dispone como uno solo. En este frente, se destaca un primer escenario de trabajo que la relación entre los dos, no es un hecho académico o investigativo como tal, sino una clara lógica de trabajo que las hace fuertes ante cualquier tema de estudio.

La formación jurídica no se ha quedado ajena para responder a los llamados de cambio o de reflexión de la política, frente a los diversos ámbitos, hechos o eventos de la interdisciplinar. Definidos como escuelas del derecho y/o paradigmas o como en este caso posibles epistemologías, han surgido referentes que contienen elementos con los cuales poder dar cuenta de los estudios políticos y jurídicos como son: 1. la ciencia jurídica de Holmes (1897, 1899); 2. la jurisprudencia sociológica; 3. el pragmático o realismo y 4. los estudios críticos del derecho. Estos cuatro con una alta carga de los estudios políticos y jurídicos como a continuación se intentará dar análisis como fundamento del campo.

Treviño (2020) de una forma magistral expone los cuatro paradigmas o corrientes epistemológicas de los estudios políticos y jurídicos, con la consecución de las cuatro corrientes, escuelas o paradigmas con los cuales podría adentrarse al mundo temático del campo político y jurídico. Al tomar como referencia a la ciencia jurídica desde Holmes a la par con el análisis de la juris-

prudencia sociológica, el realismo jurídico y los estudios críticos del derecho, manifiesta precisamente que existen otras formas de entender la capacidad de la política y lo jurídico para sacar productos no solo con fuerza de ley sino con carácter político como los que deberían emanar a partir de esta alianza.

En cuanto a la ciencia jurídica de Holmes, destaca la fuerza del positivismo jurídico bajo una orientación de perspectiva hermenéutica de la cual el propio autor señala que dicha escuela le agradece a la sociología dicho avance en cuanto a la formación de conceptos, lenguaje, intuición y su relación con otras áreas o instituciones sociales de lo cual se considera que el positivismo es una metodología estructural de la ciencia jurídica que le ha permitido desarrollar conocimiento con el cual estudiar el derecho bajo aproximaciones jurídicas con la idea de que el derecho como ciencia a la par que la política con la ciencia política cubren sus propias necesidades sin recurrir a otras disciplinas o fuentes de conocimiento.

Se puede tomar el positivismo político y jurídico, como un campo de los estudios políticos y jurídicos o de la temática que se quisiera desarrollar en la medida a que se busca analizar si el grado de evolución de un tema ha venido contribuyendo a la solución de problemáticas pasadas, presente o porque no futuras. Es decir, más que un recambio de la legislación o la norma y la creación de otras legislaciones para superar los escollos se trata de evidenciar si efectivamente el positivismo ha estado a la altura de los cambios como cuando se habla de que lo político reconozca su carácter evaluativo o de medición o que lo jurídico además de la frecuencia en el uso de los textos jurídicos este a tono de las prioridades de la población, mostrando con ello, evolución del positivismo.

De otro lado con respecto a la Jurisprudencia Sociológica, Pound (1943) en Treviño (2020), cuestiona de nuevo la superficialidad del derecho acuñada en conceptos e ideas del pasado que han dejado de ser vitales en otras áreas del saber

cómo los estudios políticos. En ello, profundizo al indicar que existía y aún, una discrepancia entre el derecho de los libros y el derecho en acción, conduciéndola a una ciencia abstracta o estéril al entender la formula del derecho o de las demás áreas del saber cómo un fin en sí mismo y no un medio como era de esperarse, hecho que lo conllevo a denominar el derecho como un campo mecanicista, poco realista y menor orientada a propósitos.

Para Pound (1943) la formación jurídica como la política debe estar configurada para resolver problemas de la sociedad, del estado o la nación y no para el resarcimiento de posturas doctrinales o ideológicas que en nada resuelven el objeto de estudio analizado. En esa medida, insta a los juristas o jurisconsultas que superen la dimensión mecánica de la formación jurídica, así como de los politólogos al concentrarse en el estudio del poder, cuando lo importante, es que a partir de dichas instancias puedan resolverse las demandas de los distintos grupos sociales, superando la idea que la justicia solo es administrable bajo su propia perspectiva sin correspondencia con otras áreas del saber.

White (1972) en Treviño (2020), cuestiona la certeza, predictibilidad y nulo escepticismo de las áreas formales del derecho y de las ciencias políticas. En esa medida, indica que no entienden como dos áreas tan relevantes como estas se alejan de la realidad y continúan adelante, como si ello no tuviese que ver con ellas. Toma como referencia los episodios de las guerras o incluso las insurrecciones sociales que se presentaron en los distintos países, hecho que fue señalado por White como hipócrita por cuanto el formalismo jurídico a su vez que el político, se entrecruzaban con un alto grado de uniformidad por fuera de diásporas o acometida de ninguna índole. De allí, que se consideró que estas como otras disciplinas, estaban fuera de la realidad social.

Es un buen interrogante que deja White, al prestar atención al realismo jurídico, hecho que ha conllevado para que se pasa a la evaluación económica de las leyes, su cometido político por

medio de la evaluación o valoración por parte de los individuos implicados como una especie de programa de autoevaluación con lo cual una ley antes de ser promulgada o propuesta política antes de ser llevada a registro jurídico debe pasar por el tamiza social (Llewellyn, 2020). Por ende, en la actualidad se habla de conceptos como marco de impacto normativo o evaluación de las normas por parte de la sociedad antes de que estas salgan a la luz, con la idea, en que la sociedad también puede participar en lo político y jurídico a su vez que el total de los corporados de los sistemas judiciales.

Por último en Treviño (2020) en los estudios críticos del Derecho, se unen Ritzer (1992) y Livingstone (1982), que afloran dicho concepto con la idea de que el Estado, no puede utilizar ni el poder ni las normas a su favor. Si bien, no puede decirse que existe un método de esta forma de estudio, lo que si es cierto, es que comporta como un detente del poder político y jurídico que tienen los Estados para tomar medidas a su favor o en contra de la población. Dichos autores esgrimen que existen tres elementos con los cuales poder lograr el propósito de dichos estudios a través de la teoría social, la crítica pura y la explicación textual, como una especie de refundación de lo que se establece desde el poder de la política y se administra a través de la definición de las leyes.

Para dar cuenta de los tres elementos que indican Ritzer y Livingstone, ambos autores manifiestan que deben ser analizadas otras áreas para poder entender la capacidad del Estado para sacar provecho de sus actuaciones políticas en el marco legal, epicentro de la idea, que el estudio de la política es equivalente al del estudio jurídico, ya que la una reproduce a la otra en aras de las necesidades y en el sentido de la obligación de manera reciproca. No obstante, consideran que la sociología jurídica podría dar más réditos para provocar un mejoramiento del análisis sin desconocer que la antropología o la etnografía jurídica también podrían ofrecer elementos interesantes para estos ejercicios.

De manera reciente, se habla de llevar los estudios políticos y jurídicos a la toma de decisiones de los actores estatales, institucionales además de los actores o sujetos correlacionados. Pereira (2021), considera que los jueces son actores políticos los cuales utilizan herramientas de las ciencias políticas para afianzar el contenido jurídico con la argumentación política, en tanto, que igualmente el legislativo es un actor judicial quien se dispensa de lo jurídico para argumentar el carácter político de sus actuaciones, amparándose de la misma forma en las ciencias jurídicas. En común, ambos deben afrontar situaciones reales o hechos y estudios que manifiestan que debe prevalecer tanto un activismo judicial como político a la hora de tomar medidas para la sociedad.

El ejemplo anterior, muestra precisamente que la actualidad política y jurídica obliga a los estudios políticos y jurídicos a tomar fuerzas como unidad de medida compleja en temas que por sí solas no tendrían elementos de trabajo. Es este frente, se exploran como distintos actores toman vocería política siendo referentes judiciales o de esta última por parte de los políticos o la política. El propósito de los estudios políticos y jurídicos además de identificar este comportamiento, debe mostrar los caminos a seguir en cuanto a los momentos en que estos convergen, disipan o definitivamente se separan, mostrando la posibilidad en la que ambos frentes pueden ser optimizados o eficientes.

Conclusiones

Se procura que cada trabajo o temática que vincule la relación entre lo político y lo jurídico haga revisión de la fundamentación filosófica compuesta por estas ramas, toda vez, que el análisis de cualquier elemento parte del mundo de las ideas, el pensamiento o la creación de conocimiento, por ende, no puede pasar desapercibida la idea sobre la cual la filosofía política y jurídica tiene la capacidad de dar luces a temas que se consideran trascendentales por fuera del mundo de las ideas o del pensamiento que las ha

creado, y por ende, hace obligatorio que se han pasados por esta retina analítica.

En virtud de las ciencias políticas y jurídicas se insta a darle fuerza al material metódico o metodológico con los cuales además de matizar los elementos que las sustentan de manera individual, los elementos que podrían unirlos como un cuerpo metodológico, evento que vuelve más interesante el uso de las ciencias políticas y jurídicas que si bien son explicativas de un fenómeno, instan por la definición de métodos de trabajo para acercarlas, hecho que debe ser construido, dado que la unión de estas al parecer es reciente, de allí que, cualquier intención de unirlos también implica definir sus métodos comunes.

Los estudios políticos y jurídicos implican la definición de un inventario, reservorio o bolsa de temáticas sobre las cuales extender la opción doctoral o de cualquier ámbito de asesoría, consultoría, estudios de casos o trabajos de campo, en un escenario global donde ya no existen distancias entre ellas, pero si las formas, de hacerlas más entendible para la relación Estado - Nación o de los ciudadanos frente a estos últimos en la medida que en estos cuerpos colegiados existen seres humanos con iguales fallas o formas de pensamiento que pueden enderezar o entorpecer los perfiles de las instituciones que representan, y que de no tamizarse, pueden pervertir las acciones que se buscan con ambas.

Referencias

- Amézquita Quintana, C. (2008). Los campos político y jurídico en perspectiva comparada. Una aproximación desde la propuesta de Pierre Bourdieu. *Universitas humanística*, (65), 89-115.
- Becker, T.L. (1967). The Fall and Rise of Political Scientific Jurisprudence: It's Relevance to Contemporary Legal Concerns, 45 N.C. L. Rev. 642 (1967), p.658. Available at: <http://scholarship.law.unc.edu/nclr/vol45/iss3/3>.
- Cárdenas Sierra, C.A., y Guarín Ramírez, É. A. (2008). Filosofía política y Teoría del Derecho (filosofía del lenguaje,

- lingüística y teoría de la argumentación). Tomás de Aquino en diálogo con Bobbio, Rawls, Chomsky y Alexy, *Revista IUSTA*, 2 (29), 15-36.
- Castro Sánchez, F. J., Verano Gómez, N. C., & Camaño Carballo, L. (2021). Epistemología de producción científica en campos específicos del conocimiento: los casos de educación y derecho. *Revista Conrado*, 17(81), 187-195. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1885/1846>
- Cerra, L. E. (2022). Epistemología en el Derecho. *Advocatus*, 19(38), 207-224. DOI: <https://doi.org/10.18041/0124-0102/a.38.9755>
- Díez Sastre, S. (2018). *La formación de conceptos en el Derecho Público. Un estudio de metodología académica, funciones y criterios de formación de los conceptos jurídicos*. Colección Administración pública y Derecho. Marcial Pons.
- Espinoza Ariza, J. (2023). El contractualismo de Thomas Hobbes y el derecho penal del enemigo, *Lex*, 31 (21), 197-210. <https://orcid.org/0000-0003-0328-8858> <http://dx.doi.org/10.21503/lex.v21i31.2470>
- Esponda, K. (2017). La responsabilidad del ciudadano en la justicia de transición: reflexiones en torno al papel de la filosofía en la época del post-acuerdo. *Revista Filosofía UIS*. 16 (1), doi: <http://dx.doi.org/10.18273/revfil.v16n1-2017001>
- Ferrajoli, L.(2018). *Constitucionalismo más allá del Estado*. Traducción de Perfecto Andrés Ibanez. Editorial Trotta.
- Fink, J.W. (2016). “*Law, politics, and the creation of public policy: How the two can come together and create better public policy*” Graduate Theses and Dissertations. 15699. <https://lib.dr.iastate.edu/etd/15699>, 2016, p.61.]
- Friedman, L.M. (1971). *Some Thoughts on the Relationship Between Law and Political Science*, 1971 WASH. U. L. Q. 375 (1971), p.376, Available at: https://openscholarship.wustl.edu/law_lawreview/vol1971/iss2/11
- Garzón Vallejo, I. (2009). ¿Ciencia política vs. filosofía política? Acerca de una interminable disputa epistemológica. *Revista De La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 39(111), 305–335. Recuperado a partir de <https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/view/3848>
- Guachetá Torres, J. D., & Rojas Toledo, J. (2020). Epistemología Jurídica: Devenir de la Enseñanza y Ejercicio Profesional de la Ciencia del Derecho en Colombia. *Justicia*, 25(38), 77-94. <https://doi.org/10.17081/just.25.38.3698>
- Gutiérrez, I. (2020). *Derecho constitucional en construcción. Filosofía y sociología del derecho*. Grupo editorial Ibáñez & Derecho Global. 1ª edición.
- Guzmán Mendoza, C. E. (2008). La política como objeto de reflexión. *Revista de derecho*, (30), 268-298. <http://www.scielo.org.co/pdf/dere/n30/n30a10.pdf>
- Hernández Terán, M. (2020). *Aplicación del derecho, imperio de la ley y neoconstitucionalismo*. Grupo editorial Ibáñez.
- Holmes, O. W. (1899). «Law in Science and Science in Law», 12 Harv. L. Rev. 443, 1899.
- Holmes, O. W. (1897). «The Path of the Law», 10 Harv. L. Rev. 457, 1897.
- Llewellyn, K. N. (1930). “A Realistic Jurisprudence – The Next step”. *Columbia Law Review*, 30 (4), 431-465.
- Livingston, D. (1982). “Round the Bramble Bush: From Legal Realism to Critical Legal Scholarship”, *Harvard Law Review*, (95), 1669-1690.
- Martin, A.D., and Morgan, L.W. H. (2021). What Political Science Can Contribute to Study of law. session paper: the past, present, and future of interdisciplinary legal education 2011 annual meeting, American association of law schools. *Review of Law & Economics*. DOI://10.1515/1555-5879.1581.
- Miralbel, I. (2019). La herencia ockhamista en la filosofía política y jurídica moderna. *Alpha*, (49), 177-192. <https://doi.org/10.32735/S0718-2201201900049749> 177-192
- Pereira, G. (2021). Los Estudios Políticos de la Decisión Judicial en América Latina. *Derechos en Acción*, 20(20), 546. <https://doi.org/10.24215/25251678e546>
- Pound, R. (1943). “A survey of Social Interests”. *Harvard Law Review*, 57 (1), 1-39.
- Ritzer, G. (1992). *Contemporary Sociological Theory*, 3ra edición. New York, McGraw – Hill Inc.
- Rodríguez de Santiago, J.M. (2016). *La metodología del derecho administrativo. Reglas de racionalidad para la adopción y el control de la decisión administrativa*. Marcial Pons.

- Ruiz Bursón, F.J. (2018). Influencias de la teoría política y jurídica de Santo Tomás de Aquino en el Estado contemporáneo, *Persona y Derecho*, 78 (1), 5-50, DOI: 10.15581/011.78.5-50.
- Seneff, A.R. (2008). Hacia una epistemología de las políticas públicas. *Vetas*, 10 (28), • 13-29.
- Treviño, A.J. (2020). *La influencia de la sociología en la ciencia jurídica estadounidense: de Oliver Wendell Holmes a los Estudios Críticos de Derecho*. Universidad Externado de Colombia. Centro de Investigación en Filosofía y Derecho.
- White, E. G. (1972). "From Sociological Jurisprudence to Realism: Jurisprudence and Social Change in Early Twentieth – Century America". *Virginia Law Review*, 58 (6), 999-1028



Más allá del orden liberal: reconfiguración geopolítica, transición energética y disputa tecnológica

Beyond the Liberal Order: Geopolitical Reconfiguration, Energy Transition, and Technological Competition

GABRIEL OROZCO RESTREPO¹
GLEIDY ALEXANDRA URREGO ESTRADA²

Clasificación PUBLINDEX-MINCIENCIA: Artículo de Reflexión

Recibido: diciembre 2024

Aceptado: junio 2025

Resumen

El sistema internacional del siglo XXI atraviesa una mutación que combina la declinación del orden liberal tradicional, el auge de economías del Sur Global y la emergencia de la transición energética y la revolución digital como ejes de competencia. Por ende, este escrito reflexiona, desde la perspectiva latinoamericana, cómo el ascenso de los BRICS+ y la rivalidad entre China y Estados Unidos por el control de las tecnologías limpias y de los recursos estratégicos reconfiguran la geopolítica. La ruta metodológica es de corte descriptiva, a partir de la revisión de documentos oficiales en los cuales se presenta la trayectoria de América Latina como periferia exportadora marcada por la heterogeneidad estructural; se revisan los conceptos de geopolítica, geoeconomía e interdependencia compleja; por último, se examinan casos de países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia que lideran la transición energética, así como proyectos de hidrógeno verde y las estrategias de Chile, Perú y Centroamérica. Como discusión central se argumenta que la región posee un potencial renovable y reservas de minerales críticos que la posicionan como actor clave, pero para superar la lógica centro-periferia requiere políticas industriales coordinadas, inversión en innovación y una diplomacia energética que priorice la autonomía y la cooperación regional.

Palabras clave: geopolítica; transición energética; Sur Global; América Latina; interdependencia compleja; geoeconomía.

1 Doctor en Economía y Relaciones Internacionales, Profesor Universidad Simón Bolívar. Secretario técnico de la Comisión Regional de Competitividad e Innovación del Atlántico (Barranquilla, Colombia). Integrante del Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno CPP. Correo electrónico: gabriel.orozco@unisimon.edu.co.

2 Doctora en Ciencias Humanas y Sociales, profesora Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia. Integrante del Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno CPP. Correo electrónico: gleidy.urrego@colmayor.edu.co.

Abstract

The international system of the 21st century is undergoing a transformation that combines the decline of the traditional liberal order, the rise of economies in the Global South, and the emergence of the energy transition and the digital revolution as key drivers of competition. Therefore, this paper reflects, from a Latin American perspective, on how the rise of the BRICS+ and the rivalry between China and the United States for control of clean technologies and strategic resources are reshaping geopolitics. The methodological approach is descriptive, based on the review of official documents that present the trajectory of Latin America as an exporting periphery marked by structural heterogeneity; the concepts of geopolitics, geoeconomics and complex interdependence are reviewed; finally, cases of countries such as Costa Rica, Uruguay, Brazil, Chile and Colombia that lead the energy transition are examined, as well as green hydrogen projects and the strategies of Chile, Peru and Central America. The central argument is that the region possesses renewable potential and critical mineral reserves that position it as a key player, but to overcome the center-periphery logic it requires coordinated industrial policies, investment in innovation and an energy diplomacy that prioritizes autonomy and regional cooperation.

Keywords: geopolitics; energy transition; Global South; Latin America; complex interdependence; geoeconomics.

Introducción

El cuestionamiento del orden liberal —sustentado en la incapacidad de gobernar problemas globales como la seguridad, el cambio climático o la migración— coincide con el ascenso de economías emergentes agrupadas en los BRICS+ y con el reposicionamiento del Sur Global como actor geoestratégico (Ikenberry, 2018). El dinamismo de China e India está cambiando

los centros de gravedad del poder y, con ellos, las reglas de la gobernanza global. Al mismo tiempo, la transición energética y la revolución digital se han convertido en dos ejes de competencia que redefinen alianzas y rivalidades: por un lado, la necesidad de descarbonizar las economías impulsa la demanda de minerales críticos y energías renovables, rubros en los que América Latina —particularmente el triángulo del litio andino y la franja costera atlántica— posee ventajas comparativas (Goldthau, 2022); por otro, la carrera por la inteligencia artificial, la infraestructura digital y los semiconductores ha generado una *geociberconfiguración* del poder que marca la pauta de las disputas contemporáneas (Sovacool et al., 2020). Esta ponencia se propone analizar el lugar de América Latina en la nueva geopolítica y geoeconomía de los recursos energéticos, comprender cómo puede superar su condición periférica y situarse como actor central en la transición energética global.

De hecho, el sistema internacional del siglo XXI atraviesa una mutación que combina la declinación del orden liberal tradicional, el auge de economías del Sur Global y la emergencia de la transición energética y la revolución digital como ejes de competencia. Por ende, este escrito reflexiona, desde la perspectiva latinoamericana, cómo el ascenso de los BRICS+ y la rivalidad entre China y Estados Unidos por el control de las tecnologías limpias y de los recursos estratégicos reconfiguran la geopolítica.

La geopolítica enfrenta un cambio de paradigma respecto a la generación uso de la energía que pide con urgencia mayor desarrollo tecnológico, en especial, uno que este en consonancia con el cambio de la matriz actual energética basada en fuentes fósiles a fuentes renovables. Dicho cambio alude a una transición que permitan sostener el consumo energético del planeta, a su vez, consolide y produzca cambios en el relacionamiento entre la demanda, la oferta, a la desregularización del Estado, pero con una perspectiva de democratización en la incorporación de prácticas y usos energéticos en la población en los que se refiere a acceso energético.

Dicho paradigma es problemático en tanto que el cambio geopolítico implica disputa por liderar avances tecnológicos en materia de transición energética, lo que implica consolidar un monopolio de mercado y, desde luego, lider la discusión y la agenda en materia de desarrollo sostenible. De hecho, las discusiones están centradas en superar el orden liberal, esto es, la unipolaridad (Ikenberry, 2011, 2018; Mearsheimer, 2019) y reconfigurar un mundo hiperglobalizado a partir de una geoeconomía (Mohr, 2024) que funciona desde un multilateralismo competitivo (Acharya, 2018; Farrell & Newman, 2019; Drezner et al, 2021) en el que hay una proliferación de controles estatales en las sanciones y en las exportaciones, cuyo funcionamiento del relato liberal que procuraba apertura de capitales y comercial como un Estado moderado, transita hacia instituciones multilaterales como escenarios de desarrollo e inversión tecnológica. También la ampliación del concepto de seguridad cuando de datos, suministros y chips se trate, a partir de criterios tecnológicos y el establecimiento de competencias estratégicas que se condensan en la trípole energía-tecnología-territorio.

Dicha trípole se materializa en aumento brutal de demanda de minerales críticos: litio, cobalto, níquel, tierras raras, cobre, grafito, cuarzo, etc. (Yergin, D, 2020) como la concentración territorial de reservas y la capacidad de manufactura y refinado para la transformación de esos minerales en energía. También está la disputa tecnológica que incluye la fabricación de chips avanzados, inteligencias artificiales, satélites y cables submarinos que son infraestructuras de poder que sustentan el mercado tecnológico y en el cual el territorio se organiza bajo la lógica no del PIB, sino como cadena de valor que incluye: minerales, manufactura tecnológica, datos y logística (Smil, 2022).

Por ende, la ruta metodológica del presente escrito reflexivo es de corte descriptiva, a partir de la revisión de documentos oficiales en los cuales se presenta la trayectoria de América Latina como periferia exportadora marcada por la heterogeneidad estructural; se revisan los conceptos

de geopolítica, geoeconomía e interdependencia compleja; por último, se examinan casos de países como Costa Rica, Uruguay, Brasil, Chile y Colombia que lideran la transición energética, así como proyectos de hidrógeno verde y las estrategias de Chile, Perú y Centroamérica

Marco teórico

Este apartado aborda dos conceptos: la geopolítica y la interdependencia compleja. Por su parte, la geopolítica en la actualidad tiene su condición de comprensión desde la geoeconomía aplicada a la transición energética, por ende, es pertinente resaltar que la geopolítica analiza cómo la geografía —posición territorial, recursos naturales, rutas de comercio y clima— influye en el poder y las estrategias de los Estados (Mackinder, 1919). Tradicionalmente centrada en la dimensión militar, hoy incorpora el impacto de la energía, la tecnología y la infraestructura en la proyección de poder. La geoeconomía describe cómo los Estados utilizan herramientas económicas —comercio, inversiones, sanciones, tecnología— para alcanzar objetivos de poder y seguridad. Blackwill y Harris (2016) la definen como el uso de instrumentos económicos para promover y defender intereses nacionales y lograr resultados geopolíticos favorables, de modo que, la energía se convierte en un arma y una moneda de cambio.

Por otro lado, Keohane y Nye (1977) proponen la noción de interdependencia compleja para describir un mundo en el que las relaciones internacionales ya no están dominadas exclusivamente por el poder militar, sino por múltiples canales de interacción económica, política y social. La teoría identifica tres características: a) múltiples canales de comunicación (gubernamentales y transnacionales); b) ausencia de jerarquía entre temas, de modo que cuestiones económicas o ambientales pueden ser tan prioritarias como la seguridad; y c) un papel limitado de la fuerza militar, ya que la coerción es ineficaz o demasiado costosa para resolver conflictos económicos o ecológicos. Esta perspectiva resulta útil para

entender la geoeconomía de la energía, donde las cadenas de suministro, la tecnología y las políticas climáticas conectan a múltiples actores y cualquier interrupción repercute globalmente.

La interdependencia crea oportunidades y riesgos. Por un lado, la transición energética favorece la cooperación en investigación y el intercambio de tecnología; por otro, genera dependencias asimétricas que pueden convertirse en herramientas de presión (*interdependencia armada*). El uso del gas ruso como instrumento de coerción en Europa, la dependencia de Estados Unidos del petróleo venezolano y la creciente participación de empresas chinas en la minería latinoamericana ilustran cómo los lazos energéticos se transforman en armas geopolíticas. Para América Latina, la interdependencia compleja implica articular estrategias de diplomacia multicanal, establecer instituciones regionales robustas y combinar autonomía en la gestión de los recursos con cooperación internacional.

Tanto la geopolítica en clave de transición energética y disputa tecnológica se enmarcan en un rol de control de energía, datos y materiales estratégicos, es decir, las potencias que tenga este control gobiernan el mercado energético (Ríos & Guerra, 2025). En cuanto a la interdependencia compleja se condensa en Fragmentación geoeconómica y Sur Global a través de una práctica como *friendshoring* (da rocha et al, 2025), es decir, deslocalizar y regionalizar la cadena de valor energética hacia aliados. Por su parte, el sur global mas demandado en materia de recursos y presionado a aliarse.

De modo que, la geopolítica y la interdependencia compleja requiere de una matriz de gobernanza energética (Galera, 2024) que tiene una perspectiva geoeconómica e implica la superación de la ilusión liberal y el papel de Estado se direcciona hacia establecer estrategias de alianzas a partir de la inversión, explotación de minerales, el desarrollo y transferencia tecnológica de refinado y manufactura energética. Dicha gobernanza se comprende como modelo de gobierno y poder que dependerá de la arti-

culación de estrategias regionales, políticas económicas para el desarrollo industrial tecnológico que va desde la extracción de minerales hasta la generación de tecnología; búsqueda de aliados y establecer políticas socioambientales que permita consolidar mecanismos de financiación y transición justa, en especial, al Sur global frente a posibles sanciones y controles por arte de las potencias.

Discusión

La discusión se centra en la reconfiguración geopolítica contemporánea como un asunto de transición energética y disputa tecnológica. En tal sentido, la transición energética como arena geopolítica responde a la urgencia de mitigar el cambio climático. Sin embargo, las potencias adoptan estrategias divergentes. China ha apostado decididamente por la electrificación y las energías renovables: en 2024 instaló más capacidad solar y eólica que el resto del mundo combinado y ha reducido los costes de estas tecnologías entre 60 % y 90 % desde 2010 (The Diplomat, 2025a). Controla una porción significativa de la cadena de suministro de minerales críticos y produce cerca de una de cada cinco baterías de ion-litio. Estas ventajas le permiten exportar módulos solares y baterías a precios muy bajos, expandiendo su influencia económica y diplomática (Ember, 2025). En contraste, Estados Unidos ha mostrado un retorno al extractivismo fósil: en 2024 la producción energética estadounidense alcanzó un récord, con el gas natural representando el 38 % y el petróleo el 27 % de la energía producida (Inspectioneering & EIA, 2025). Aunque la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de 2022 estimuló inversiones en tecnologías limpias, el discurso político dominante oscila hacia la autarquía fósil, generando un desfase respecto al dinamismo tecnológico chino (The Diplomat, 2025b).

Este choque de modelos es geoeconómico: China utiliza la transición energética para incrementar su poder blando y crear dependencia tecnológica en otros países, mientras Estados Unidos arriesga ceder liderazgo en los sectores

que definen la economía del futuro. Además, las tensiones geopolíticas —guerra en Ucrania, conflicto en Oriente Medio, tensiones en el mar de China meridional— han disparado los precios del petróleo y el gas, otorgando a los países productores ingresos extraordinarios, pero también volatilidad.

De conformidad con lo anterior, el rol estratégico de América Latina es clave, puesto que posee abundantes recursos energéticos y minerales estratégicos: concentra 48 % de las reservas mundiales de litio, 36,6 % de cobre, 35 % de molibdeno y 23,8 % de grafito (Revisita Común, 2025). La participación de energías renovables en la generación eléctrica supera el 25 % gracias a la hidroelectricidad y los biocombustibles, y entre 2015 y 2022 la cuota renovable aumentó de 53 % a 65 % mientras las emisiones de CO₂ disminuyeron (FES, 2024). Esta combinación de minerales críticos y potencial renovable convierte a la región en un objetivo central de las estrategias chinas y estadounidenses. Pekín busca asegurar el suministro de litio y cobre mediante inversiones y acuerdos financieros; Washington reaviva su presencia diplomática y militar para mantener el acceso a petróleo y gas. La región debe evitar replicar la dependencia extractivista y aprovechar la transición para diversificar su economía, generar valor agregado y fortalecer su autonomía energética.

Es de recordar que, desde sus inicios como repúblicas independientes, las economías latinoamericanas han estado insertas en un orden mundial que las concibe como periferias exportadoras de materias primas (Prebisch, 1984). Los estudios de la CEPAL y de economistas como Aníbal Pinto identificaron temprano una estructura dual donde un complejo exportador de productos primarios —minería, petróleo, agricultura— se integra al mercado mundial, mientras el resto de la economía permanece rezagado (Pinto, 1970). Este patrón genera lo que la CEPAL denominó heterogeneidad estructural: coexistencia de sectores modernos altamente productivos con sectores tradicionales de baja productividad, limitando la creación de

empleo formal y perpetuando la inequidad (CEPAL, 2010).

El ciclo de auge de materias primas alimentado por la demanda de China en las primeras décadas del siglo XXI profundizó esta especialización. Entre 2000 y 2013 el comercio bilateral entre China y América Latina pasó de 12 mil millones de dólares a 289 mil millones, y en 2021 superó los 430 mil millones, reflejando la creciente dependencia de pocas materias primas (Elson, 2014). Brasil ilustra la magnitud de esta relación: sus exportaciones de soja a China crecieron de 20 mil millones de dólares en 2017 a casi 50 mil millones en 2025, y solo en marzo de 2025 envió 15,7 millones de toneladas de soja, más del 70 % de sus exportaciones mensuales (Americas Market Intelligence, 2025). La inversión china en infraestructura —como la ampliación del puerto de Chancay en Perú— busca acortar rutas de comercio y crear vínculos geopolíticos de largo plazo.

Este auge coincidió con un superciclo de precios que, si bien aumentó los ingresos y redujo la pobreza en varios países, consolidó la reprimarización y evidenció la vulnerabilidad externa (Ocampo, 2014). La posterior caída de los precios demostró que muchos gobiernos no aprovecharon el boom para diversificar y acumular reservas; se reforzaron fenómenos como la *enfermedad holandesa* y se profundizó la concentración del ingreso. Al mismo tiempo, los bancos de desarrollo chinos concedieron cerca de 100 mil millones de dólares en préstamos a la región entre 2005 y 2014, a menudo a cambio de suministros de petróleo o minerales, creando nuevas dependencias financieras (Elson, 2014).

Por ende, en la actualidad geopolítica, América Latina discute la transición energética como un asunto económico global que requiere de aliados y estrategias, es decir, la transición energética está generando una reconfiguración geoeconómica en la que América Latina busca pasar de ser una periferia exportadora de combustibles fósiles a convertirse en proveedor y productor de energías renovables y minerales

estratégicos. Por ejemplo, los países líderes en energías renovables se encuentra Costa Rica que genera alrededor del 99 % de su electricidad con fuentes renovables; en 2023 un 72,2 % provenía de hidroelectricidad, 12,7 % de geotermia y 10,8 % de eólica (Delphos, 2024). Sin embargo, su dependencia de la hidroelectricidad la hace vulnerable al cambio climático, por lo que está diversificando con energía solar y almacenamiento (The Verge, 2024). Uruguay obtiene más del 98 % de su electricidad de fuentes renovables gracias a inversiones público-privadas en hidroelectricidad, eólica, solar y biomasa (Las Empresas Verdes, 2024).

Brasil, por su parte, posee una de las matrices energéticas más limpias del mundo: casi la mitad de su consumo proviene de fuentes renovables y el 87 % de la generación eléctrica se produce mediante hidroelectricidad, solar, eólica y biocombustibles (Gobierno de Brasil, 2024). El país ha lanzado un Programa de Aceleración del Crecimiento que destina más de 82 mil millones de dólares a proyectos de transición energética y promueve la mezcla de etanol al 30 % en la gasolina. **Chile** destaca por su ambición en el hidrógeno verde y por la rápida expansión de la energía solar y eólica; su ubicación y estabilidad política lo convierten en un abastecedor seguro en un contexto de volatilidad global (H2 News, 2025). **Colombia** impulsa la diversificación de su matriz con 36 iniciativas de hidrógeno (18 GW potenciales), más de 2 GW de energía solar y programas comunitarios de energía distribuida, aunque enfrenta conflictos sociales en proyectos eólicos en la Guajira Ministerio de Minas y Energía de Colombia, 2025; Cambio Colombia, 2025).

Por otro lado, también está la discusión en materia de transición energética se localiza en la innovación en hidrógeno y nuevas tecnologías. América Latina aspira a convertirse en un actor global en hidrógeno verde. Chile planea aprovechar su potencial solar y eólico para producir hidrógeno competitivo y exportarlo a Asia; Colombia explora hidrógeno natural y desarrolla marcos regulatorios pioneros; Perú,

con una inversión de 2,4 mil millones de dólares en un proyecto que combina una planta solar de 1 800 MW con una planta de hidrógeno y amoníaco en el puerto de Matarani, planea producir 85 000 toneladas de hidrógeno al año (Energía Estratégica, 2024). La transformación de puertos en hubs energéticos —como Porto do Açu en Brasil— muestra cómo las infraestructuras logísticas pueden integrar la producción y exportación de energías limpias mientras gestionan los hidrocarburos existentes.

No obstante, la transición es desigual. México generó solo 22 % de su electricidad a partir de fuentes renovables en 2024 y sigue dependiendo del gas importado; su objetivo de alcanzar un 45 % de renovables para 2030 requiere inversiones y certidumbre regulatoria (Ember, 2025b). Otros países centroamericanos —Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá— han identificado 181 proyectos candidatos de generación que suman más de 10,2 GW, pero varios de ellos incluyen gas natural y combustibles líquidos, reflejando una transición gradual y la necesidad de garantizar la seguridad del suministro (EOR, 2024).

De hecho, para superar la lógica centro-periferia, la región debe fortalecer las cadenas de valor locales, invertir en transmisión y almacenamiento, proteger los derechos de las comunidades y la biodiversidad, y fomentar la investigación y la innovación. También debe coordinarse regionalmente a través de organismos como OLADE, CELAC y ALBA para negociar en bloque con las grandes potencias. La cooperación Sur-Sur, la transferencia tecnológica y los fondos verdes internacionales pueden apoyar esta transición.

Más allá de una crisis coyuntural del orden liberal, asistimos a una reconfiguración sistémica en la que la transición energética, la emergencia del Sur Global y la disputa por la hegemonía tecnológica se entrelazan. América Latina posee un inmenso potencial renovable y concentra reservas estratégicas de petróleo y minerales que son clave para la seguridad energética global. Sin embargo, solo logrará romper con la lógica

centro-periferia si genera valor agregado local, desarrolla capacidades tecnológicas propias y coordina una diplomacia energética y digital que le permita negociar en bloque con las potencias. La tesis central de esta ponencia es que el Sur Global, y en particular América Latina, puede catalizar un nuevo paradigma internacional: uno en el que la autonomía energética, la soberanía tecnológica y la cooperación regional sean pilares de un desarrollo inclusivo y sostenible. Para ello se requieren instituciones fuertes, estrategias de largo plazo y la convicción de que la transición energética y la revolución tecnológica no son solo desafíos, sino también oportunidades para construir un futuro más equitativo y multipolar.

Por ende, América Latina tiene como reto aprovechar la ventana para negociar transferencia tecnológica, y con ello valor agregado local y afianzar una política industrial tecnológica nacional. El mayor reto está en superar la dependencia del petróleo y del gas, en especial, la dependencia de minerales críticos como de la capacidad de refinado y manufactura tecnológica, y con ello evitar conflictos socio ambientales; esto requiere de gobernanza energética.

Referencias

- Acharya, A. (2018). *Constructing Global Order: Agency and Change in World Politics*. Cambridge University Press.
- Americas Market Intelligence. (2025, marzo). *How China is expanding its influence in Latin America amid the US-China trade war*. Recuperado de <https://americasmi.com/>
- Blackwill, R. D., & Harris, J. M. (2016). *War by other means: Geoeconomics and statecraft*. Harvard University Press.
- Cambio Colombia. (2025). *Transición energética en Colombia: avances, proyectos y desafíos*. Recuperado de <https://especial.cambiocolombia.com/>
- CEPAL. (2010). *Estilos de desarrollo, heterogeneidad estructural y cambio climático en América Latina*. Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- da Rocha, A., da Fonseca, L. N. M., & Kogut, C. S. (2025). Deciphering relocation paths: A systematic literature review of near-shoring and friend-shoring. *Journal of International Management*, 101282.
- Delphos. (2024). *Costa Rica: matriz eléctrica renovable y retos futuros*. Recuperado de <https://delphos.co/>
- Drezner, D., Farrell, H., & Newman, A. (Eds.). (2021). *The Uses and Abuses of Weaponized Interdependence*. Brookings Institution Press.
- Elson, A. (2014). China's economic ascension in Latin America. *Finance & Development*, 51(4), 25–28.
- Ember. (2025a). *China energy transition review 2025*. Recuperado de <https://ember-energy.org/>
- Ember. (2025b). *Las renovables: el camino hacia la seguridad energética en México*. Recuperado de <https://ember-energy.org/>
- Energía Estratégica. (2024). *Invertirán 2 400 millones de dólares en un megaproyecto de hidrógeno verde en Arequipa*. Recuperado de <https://www.energiaestrategica.com/>
- EOR. (2024). *Plan de expansión de la generación y transmisión regional 2024-2038*. Ente Operador Regional del Mercado Eléctrico de América Central.
- Farrell, H., & Newman, A. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), 42–79.
- FES. (2024). *Geopolítica de la transición energética: una perspectiva desde el Sur Global*. Fundación Friedrich Ebert en Bolivia.
- Galera, M. D. S. (2024). La Unión Europea y la Gobernanza Energética. In *Derecho climático europeo: políticas de la Unión y acción exterior* (pp. 227-249). Tirant lo Blanch.
- Gobierno de Brasil. (2024). *Brasil en el G20 y el liderazgo en la transición energética*. Recuperado de <https://www.gov.br/>
- H2 News. (2025). *Chile busca consolidarse como actor estratégico en la nueva geopolítica del hidrógeno*. Recuperado de <https://h2news.cl/>

- Ikenberry, G. J. (2011). *Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order*. Princeton University Press.
- Ikenberry, G. J. (2018). The End of Liberal International Order? *International Affairs*, 94(1), 7–23.
- Ikenberry, G. J. (2018). *After victory: Institutions, strategic restraint, and the rebuilding of order after major wars* (nueva ed.). Princeton University Press.
- Inspectioneering & U.S. Energy Information Administration. (2025). *EIA: the U.S. produced more energy in 2024 than ever before*. Recuperado de <https://inspectioneering.com/>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown.
- Las Empresas Verdes. (2024). *Uruguay lidera el ranking mundial de energías renovables*. Recuperado de <https://lasempresasverdes.com/>
- Mackinder, H. J. (1919). *Democratic ideals and reality: A study in the politics of reconstruction*. Constable & Company.
- Mearsheimer, J. J. (2019). *The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities*. Yale University Press. (Cris Maastricht University)
- Ministerio de Minas y Energía de Colombia. (2025). *Gobierno nacional impulsa el hidrógeno como motor de la transición energética en Colombia*. Recuperado de <https://minenergia.gov.co/>
- Mohr, C. (2024). *Geoeconomics*. Kiel Working Paper 2279.
- Ocampo, J. A. (2014). *Super cycles of commodity prices since the mid-nineteenth century*. *Política y Economía*, 1(1), 21–45.
- Pinto, A. (1970). *Naturaleza y enseñanza de la heterogeneidad estructural en América Latina*. Revista de la CEPAL.
- Prebisch, R. (1984). *El desarrollo económico de la América Latina y algunos de sus principales problemas*. Fondo de Cultura Económica.
- Revista Común. (2025). *Ante la transición energética: los recursos estratégicos como instrumento geopolítico para América Latina*. Recuperado de <https://revistacomun.com/>
- Ríos, Y. A. P., & Guerra, A. R. M. (2025). Modelo de Mercado Eléctrico en el Escenario de Integración Energética Regional para América Latina.
- Smil, V. (2022). *How the World Really Works: The Science Behind How We Got Here and Where We're Going*. Viking.
- Sovacool, B. K., Martiskainen, M., Hook, A., & Baker, L. (2020). The decarbonisation divide: Contextualizing landscapes of low-carbon exploitation and toxicity in Africa. *Global Environmental Change*, 65, 102163.
- The Diplomat. (2025a). *Why the US is letting China win on energy innovation*. Recuperado de <https://thediplomat.com/>
- The Diplomat. (2025b). *China's energy transition is reshaping the global energy market*. Recuperado de <https://thediplomat.com/>
- The Verge. (2024). *Costa Rica's renewable electricity success stories*. Recuperado de <https://www.theverge.com/>
- Yergin, D. (2020). *The new map: Energy, climate, and the clash of nations*. Penguin Uk.



Educación Técnica y Tecnológica en Colombia: Hacia un Modelo de Desarrollo Sostenible. Un análisis profundo sobre los desafíos, oportunidades y el camino a seguir para consolidar la formación T&T como motor de desarrollo, equidad y competitividad nacional

Technical and Technological Education in Colombia: Toward a Sustainable Development Model. An in-depth analysis of the challenges, opportunities, and the path forward to consolidate technical and technological training as a driver of development, equity, and national competitiveness

LORENZO PORTOCARRERO SIERRA¹

Clasificación PUBLINDEX-MINCIENCIA: Artículo de reflexión

Recibido: diciembre 2024

Aceptado: junio 2025

Resumen

La educación técnica y tecnológica (T&T) se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico y social en los países que han comprendido que el progreso sostenible se construye desde el conocimiento aplicado, la innovación y el fortalecimiento del talento humano. En Colombia, este nivel educativo está llamado a ocupar un papel protagónico en la transformación del modelo productivo y en la consolidación de una economía más competitiva, incluyente y adaptada a los retos contemporáneos.

El futuro del trabajo ya está aquí. La automatización, la inteligencia artificial, la física cuántica, la digitalización y las nuevas demandas del mercado laboral exigen un sistema educativo capaz de formar profesionales con habilidades técnicas, digitales y humanas que respondan a un entorno en permanente cambio. En este escenario, la educación T&T emerge como la respuesta más pertinente para articular el aprendizaje con las oportunidades reales de empleo, la productividad regional y el desarrollo sostenible. Sin embargo, para que esta promesa se convierta en realidad, Colombia debe enfrentar desafíos culturales, estructurales y de articulación que aún frenan su potencial transformador.

Palabras clave: Educación técnica y tecnológica; desarrollo sostenible; talento digital; educación superior; políticas educativas.

¹ Director Ejecutivo Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior ACIET, Bogotá, Colombia, loposi@yahoo.es / aciet@aciet.org.co-<https://orcid.org/0000-0002-3419-5112>

Abstract

Technical and technological education (T&T) has become one of the strategic pillars of economic and social development in countries that have understood that sustainable progress is built through applied knowledge, innovation, and the strengthening of human talent. In Colombia, this level of education is called to play a leading role in the transformation of the productive model and in the consolidation of a more competitive, inclusive economy that is better adapted to contemporary challenges. The future of work is already here. Automation, artificial intelligence, quantum physics, digitalization, and the new demands of the labor market require an educational system capable of training professionals with technical, digital, and human skills that respond to a constantly changing environment. In this context, T&T education emerges as the most relevant response to connect learning with real employment opportunities, regional productivity, and sustainable development. However, for this promise to become a reality, Colombia must face cultural, structural, and coordination challenges that still limit its transformative potential.

Keywords: Technical and technological education; sustainable development; digital talent; higher education; educational policy.

Introducción

La educación técnica y tecnológica (T&T) se ha convertido en uno de los pilares estratégicos del desarrollo económico y social en los países que han comprendido que el progreso sostenible se construye desde el conocimiento aplicado, la innovación y el fortalecimiento del talento humano. En Colombia, este nivel educativo está llamado a ocupar un papel protagónico en la transformación del modelo productivo y en la consolidación de una economía más competitiva, incluyente y adaptada a los retos contemporáneos.

El futuro del trabajo ya está aquí. La automatización, la inteligencia artificial, la física cuántica, la digitalización y las nuevas demandas del mercado laboral exigen un sistema educativo capaz de formar profesionales con habilidades técnicas, digitales y humanas que respondan a un entorno en permanente cambio. En este escenario, la educación T&T emerge como la respuesta más pertinente para articular el aprendizaje con las oportunidades reales de empleo, la productividad regional y el desarrollo sostenible. Sin embargo, para que esta promesa se convierta en realidad, Colombia debe enfrentar desafíos culturales, estructurales y de articulación que aún frenan su potencial transformador.

Del estigma a la oportunidad: el desafío cultural de la educación T&T

La Ley 30 de 1992 de Colombia sentó las bases para un sistema de educación superior que reconociera la formación técnica profesional y tecnológica como parte integral del ecosistema académico. Sin embargo, más de tres décadas después, el país aún enfrenta el desafío de posicionar esta categoría de formación educativa con el reconocimiento social que merece. Persisten imaginarios que asocian la formación técnica y tecnológica con opciones de menor prestigio frente a la universitaria, lo que limita la demanda y subvalora su papel en el desarrollo nacional. Como señala Lorenzo Portocarrero Sierra, ha llegado el momento de sacar a la educación T&T de ese “laberinto conceptual de ‘segunda categoría’, ‘educación sin prestigio’, ‘opción secundaria de estudio’”.

Superar este paradigma requiere una política pública sólida que no solo financie, sino que promueva activamente la formación T&T como un camino legítimo, eficaz y de alta calidad para la movilidad social y la equidad. Es un cambio cultural que debe ser liderado por el Estado, la academia y el sector productivo en un esfuerzo mancomunado. Y las cifras demuestran que este cambio ya está en marcha, aunque con avances desiguales.

Según datos consolidados del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) para 2024, la matrícula total en educación superior alcanzó 2.553.560 estudiantes. De estos, más de 675.000 jóvenes cursan programas técnicos y tecnológicos, lo que representa aproximadamente el 27% de la matrícula total. Este porcentaje, que se ha mantenido relativamente estable, refleja un avance importante pero también evidencia la necesidad de fortalecer las condiciones de calidad, pertinencia y sostenibilidad que permitan a estos programas responder a las dinámicas productivas y tecnológicas del país.

Distribución de la Matrícula en Educación Superior en Colombia (2024)

Total de estudiantes: 2,553,560

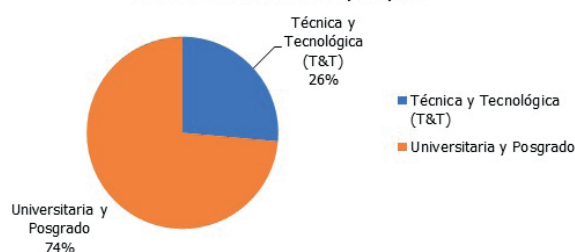


Gráfico 1. Distribución de la matrícula en educación superior por nivel (universitario vs. T&T)

Fuente: Ministerio de Educación Nacional - SNIES (Julio 2025) y artículo base.

Aún más revelador es el comportamiento de la Red de Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias Públicas (RedTTU). Según un informe de diciembre de 2025, entre el primer semestre de 2023 y el segundo de 2025, la matrícula total de pregrado en las 30 instituciones afiliadas creció un 37,1%, pasando de 156.047 a 213.977 estudiantes. Esto representa 57.930 nuevos cupos en instituciones públicas de este nivel. Pero el dato más contundente es territorial: la presencia de la RedTTU pasó de 108 a 570 municipios, un crecimiento del 427,8%. Este impulso en el sector público es una señal inequívoca de la demanda latente y del impacto positivo de políticas enfocadas en la gratuidad y la regionalización. Al llevar oferta pertinente a la “Colombia profunda”, se combate la centralización de oportunidades, se frena la migración de talentos a las grandes ciudades y se fortalece la economía local con capital humano formado para responder a las vocaciones productivas de

cada región: agroindustria, bioeconomía, turismo sostenible o servicios digitales.

Sin embargo, este crecimiento cuantitativo debe ir acompañado de un salto cualitativo en pertinencia, infraestructura y vinculación con el sector productivo para traducirse en empleabilidad y desarrollo sostenible. Porque de poco sirve formar miles de técnicos y tecnólogos si el mercado laboral no los absorbe o si las competencias adquiridas no corresponden a las necesidades reales de las empresas y las regiones. Y es aquí donde aparece uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el país.

La brecha de talento digital y la urgencia de articular educación con productividad

La pertinencia de la educación T&T se mide en su capacidad para responder a las demandas de una economía en plena transformación digital. Colombia enfrenta una brecha significativa entre las habilidades que forma su sistema educativo y las que requiere el mercado laboral. Un estudio reciente del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y la Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft) proyecta un panorama alarmante: la brecha de talento digital alcanzará cerca de 85.000 vacantes sin cubrir en 2026, y podría superar los 89.000 perfiles para 2030. La demanda total de talento digital para los próximos cinco años se proyecta en 498.000 personas

Esta brecha no es solo cuantitativa, sino cualitativa. Las empresas buscan perfiles con competencias específicas que no siempre encuentran en los egresados. La formación T&T, por su naturaleza flexible y enfocada, es la herramienta ideal para cerrar este déficit a través de programas cortos, micro credenciales y una actualización curricular constante. Pero esto solo será posible si se consolida una sinergia real y permanente entre las instituciones educativas, el sector empresarial y el gobierno.

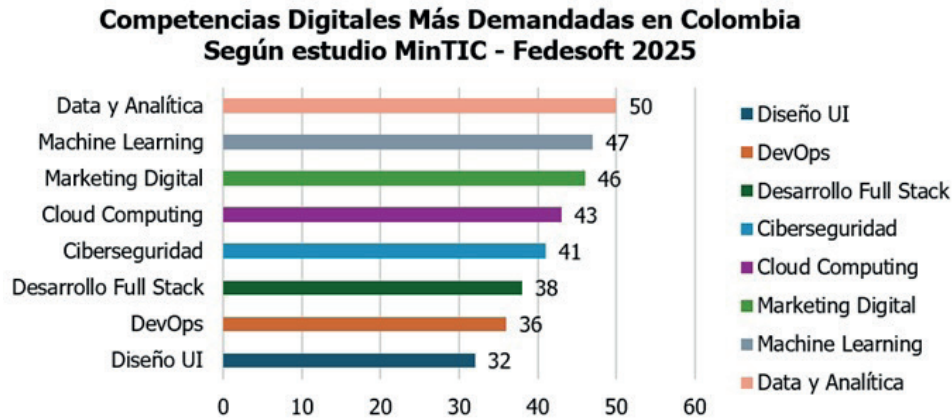


Gráfico 2. Proyección de la brecha de talento digital 2025-2030

Fuente: Estudio de Empleabilidad y Talento Digital en Colombia 2025 (MinTIC-Fedesoft) Diciembre 2025.

Esta “triple hélice” es esencial para garantizar la pertinencia curricular, fomentar la empleabilidad a través de prácticas y pasantías, impulsar la innovación mediante proyectos de investigación aplicada y cerrar brechas regionales alineando la oferta formativa con las vocaciones productivas de cada territorio. Ya en 2008, el Ministerio de Educación Nacional enfatizaba la necesidad de esta alianza estratégica para diseñar currículos por ciclos y basados en competencias. Hoy, ante la aceleración tecnológica, esta tarea es más urgente que nunca. No podemos seguir formando para un mercado laboral del pasado cuando el presente y el futuro exigen competencias radicalmente diferentes.

Las experiencias internacionales ofrecen lecciones valiosas que Colombia puede adaptar a su contexto. En países como Alemania, Suiza, Corea del Sur, Australia y Chile, la educación técnica y tecnológica ocupa un lugar central en las políticas de desarrollo. El modelo alemán, por ejemplo, combina formación académica en escuelas vocacionales con práctica profesional remunerada en empresas, garantizando una inserción laboral casi inmediata y una pertinencia del conocimiento inigualable. Los aprendices firman un contrato de formación, reciben un salario y son parte activa de la fuerza laboral desde el inicio, en un sistema gestionado de manera compartida entre el gobierno federal, los estados, las empresas y los sindicatos.

País	Modelo Principal	Inversión en Educación (% PIB)	Tasa de Empleabilidad (Graduados T&T)	Característica Clave
Alemania	Sistema Dual (Duales Ausbildungssystem)	~4.9% (2022)	> 90%	Fuerte integración empresa-escuela. Aprendizaje práctico remunerado.
Suiza	Sistema Dual y alta permeabilidad	~5.1% (2023)	~93% (Educación Superior)	Flexibilidad para transitar entre vías académicas y vocacionales.
Corea del Sur	Énfasis en I+D y Educación Tecnológica	~5.3% (Gasto público y privado)	> 90% (Escuelas Meister)	Inversión masiva en tecnología y alineación con la política industrial.
Australia	Marco Nacional de Cualificaciones (AQF) y VET	~6.0% (Gasto público)	Variable, alta en oficios específicos	Sistema estandarizado de competencias y microcredenciales.
Chile	Modelo por Competencias y Articulación	~5.2% (Gasto total, 2.3% en Ed. Superior)	> 80% en carreras técnicas de alta demanda	Referente regional en la articulación de la educación media técnica con la superior.

Corea del Sur, por su parte, ha implementado las “Escuelas Secundarias Meister”, que se especializan en áreas industriales de alta demanda y garantizan empleo a sus graduados. Con una inversión en investigación y desarrollo que supera el 4% de su PIB, el país demuestra que la alineación entre la política educativa, la industrial y la tecnológica es fundamental para la competitividad global. Mientras tanto, Australia ha desarrollado un robusto Marco Nacional de Cualificaciones que estandariza las competencias en diez niveles, permitiendo una gran flexibilidad y reconocimiento de aprendizajes, incluyendo micro credenciales. Chile, más cercano a nuestra realidad latinoamericana, se ha convertido en un referente al fortalecer la articulación entre la Educación Media Técnico-Profesional y la educación superior, logrando tasas de empleabilidad superiores al 80% en carreras técnicas clave.

Estos modelos no son recetas mágicas que puedan copiarse literalmente, pero sí señalan un camino claro: la educación T&T debe estar estrechamente vinculada con el sector productivo, debe ofrecer alternativas de financiación que eliminen las barreras económicas y debe contar con el respaldo político y presupuestal para garantizar su calidad y pertinencia. En Colombia, instituciones como el ICETEX han desempeñado un papel fundamental en este sentido.

Financiación, equidad y el rol transformador del ICETEX

El ICETEX ha sido un actor clave en la democratización del acceso a la educación superior, permitiendo que miles de jóvenes colombianos encuentren en la formación técnica y tecnológica una ruta viable para construir su proyecto de vida. Al conmemorar 75 años de historia, su papel se renueva frente a los desafíos de la nueva economía del conocimiento. Más que una entidad financiera de carácter especial, el ICETEX ha sido un aliado del talento, un facilitador de oportunidades y un promotor de movilidad social.

El portafolio del ICETEX incluye líneas de crédito específicas que apoyan directamente la formación T&T. Iniciativas como el Fondo ATENEA Técnica y Tecnológica, en alianza con la Agencia ATENEA de Bogotá, son un ejemplo claro del camino a seguir. Este fondo otorga créditos 100% condonables para matrícula y sostenimiento a jóvenes de estratos 1, 2 y 3 que deseen cursar programas T&T en la capital, financiando hasta 3,5 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes por semestre para matrícula y otorgando un apoyo de sostenimiento de 1 SMMLV por semestre. Estas condiciones eliminan barreras económicas y permiten una dedicación completa al estudio.

Modelos como este, que combinan financiación con condonación por mérito académico, son poderosos incentivos para democratizar el acceso a la educación de calidad. La expansión de programas similares a nivel nacional, articulados con las necesidades de cada departamento, podría multiplicar el impacto de la formación T&T en la equidad y el desarrollo regional. Porque en el marco del sistema mixto de educación superior colombiano, la educación técnica y tecnológica cumple un rol fundamental en la construcción de equidad. Las instituciones técnicas profesionales y tecnológicas —muchas de ellas ubicadas en regiones apartadas o con alta vulnerabilidad socioeconómica— abren oportunidades de formación a jóvenes históricamente excluidos del sistema. Estas instituciones son agentes de transformación territorial que promueven el desarrollo local y contribuyen a formar capital humano con sentido de pertenencia y compromiso social.

Pero la financiación, aunque necesaria, no es suficiente. Se requiere también una política integral de dignificación docente que incentive la formación continua, la movilidad académica y el intercambio de buenas prácticas pedagógicas. Se requiere inversión decidida en infraestructura y tecnología. Se necesita un sistema de aseguramiento de la calidad que sea exigente pero flexible, que entienda las particularidades de la formación T&T y que incentive la innovación

curricular y la investigación aplicada. Y, sobre todo, se demanda un compromiso político sostenido que trascienda gobiernos y que coloque a la educación T&T en el centro de la estrategia de desarrollo del país.

Colombia tiene ante sí la oportunidad histórica de hacer de su educación técnica y tecnológica el motor que impulse su transformación productiva y social. Para lograrlo, desde la Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET), reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando con las instituciones de educación superior, el Gobierno Nacional y el sector empresarial para consolidar un sistema que revalorice socialmente la formación T&T, mostrándola como una opción de excelencia y alta empleabilidad; que articule efectivamente la oferta académica con la demanda laboral, adoptando modelos flexibles como la formación dual y las micro credenciales; que invierta decididamente en infraestructura, tecnología y formación docente; y que fortalezca los mecanismos de financiación con un enfoque en la equidad y el desarrollo regional.

El futuro del trabajo no dependerá únicamente de los títulos, sino de las competencias, la adaptabilidad y la capacidad de innovar. La educación T&T no solo forma profesionales, sino también ciudadanos que construyen país desde el ser y el saber hacer, el conocimiento aplicado y la convicción de que el progreso se alcanza cuando el aprendizaje se convierte en oportunidad y compromiso social. La transformación que Colombia necesita comienza con el reconocimiento de que la educación técnica y tecnológica no es una alternativa de segunda categoría, sino una vía estratégica, pertinente y de alta calidad hacia el desarrollo sostenible, la equidad social y la competitividad global. El momento de actuar es ahora.

El presente artículo se desarrolla bajo un enfoque cualitativo de tipo reflexivo-analítico, orientado a comprender las dinámicas, desafíos y oportunidades de la educación técnica y tecnológica en Colombia en el marco del desarrollo

sostenible. Este enfoque permite analizar el fenómeno desde una perspectiva interpretativa, reconociendo la complejidad de los factores sociales, económicos y educativos que lo configuran.

La investigación se fundamenta en la revisión documental de fuentes secundarias, incluyendo informes oficiales, estadísticas nacionales, documentos de política pública, literatura académica y estudios de caso internacionales. Entre las principales fuentes se encuentran entidades como el Ministerio de Educación Nacional, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), así como organismos internacionales y centros de investigación.

El proceso metodológico se desarrolló en varias etapas. En primer lugar, se realizó la búsqueda, selección y organización de la información relevante, priorizando documentos recientes y pertinentes para el análisis del contexto colombiano y comparado. Posteriormente, se llevó a cabo un análisis interpretativo de la información, identificando categorías clave como cobertura educativa, pertinencia formativa, articulación con el sector productivo, brecha de talento digital y políticas de financiamiento.

Adicionalmente, se incorporó un análisis comparativo con experiencias internacionales en países que han logrado consolidar modelos exitosos de educación técnica y tecnológica, con el propósito de identificar buenas prácticas transferibles al contexto colombiano. Este ejercicio permitió enriquecer la discusión y aportar una visión más amplia sobre el papel de este nivel educativo en el desarrollo económico y social.

Finalmente, la integración de los hallazgos se realizó mediante un enfoque analítico sintético, que permitió establecer relaciones entre los diferentes elementos estudiados y formular reflexiones orientadas a fortalecer la educación técnica y tecnológica como eje estratégico para la competitividad, la equidad y el desarrollo sostenible en Colombia.

Conclusiones

La educación técnica y tecnológica en Colombia representa una oportunidad estratégica para fortalecer el desarrollo económico, la equidad social y la competitividad del país. A lo largo del análisis, se evidenció que, si bien existen avances significativos en cobertura y acceso, aún persisten desafíos relacionados con el reconocimiento social, la pertinencia de la formación y la articulación con el sector productivo.

Asimismo, se identificó que la brecha de talento digital constituye uno de los principales retos para el país, lo que refuerza la necesidad de consolidar una relación más estrecha entre educación, empresa y Estado. La formación técnica y tecnológica, por su carácter flexible y orientado a competencias, se posiciona como una herramienta clave para responder a estas demandas del mercado laboral.

Finalmente, se concluye que el fortalecimiento de este nivel educativo requiere no solo inversión en infraestructura y financiamiento, sino también un compromiso político y social que permita dignificar su valor dentro del sistema educativo. La consolidación de políticas públicas integrales, articuladas y sostenibles será determinante para que la educación T&T cumpla su papel como motor de transformación social y desarrollo sostenible en Colombia.

Referencias

- Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea). (2025). *Fondo Atenea Técnica y Tecnológica: Términos de la convocatoria*. Alcaldía Mayor de Bogotá. <https://agenciaatenea.gov.co/convocatorias/fondo-tecnica-y-tecnologica-convocatoria-3>
- Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET). (2025). *Nuestro propósito: Fortalecimiento de la Educación Superior en Colombia*. <https://www.aciet.org.co>
- Banco Mundial. (2025). *Gasto público en educación, total (% del PIB)* [Conjunto de datos]. Indicadores del desarrollo mundial. <https://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS?locations=CO>
- Congreso de la República de Colombia. (1992, 28 de diciembre). *Ley 30 de 1992: Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior*. Diario Oficial No. 40.700. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=253>
- ICETEX. (2025, 3 de agosto). *El ICETEX cumple 75 años impulsando oportunidades que han llegado a 5,7 millones de colombianos*. Oficina Asesora de Comunicaciones. <https://web.icetex.gov.co/es/-/icetex-cumple-75-anos-impulsando-oportunidades-que-han-llegado-57-millones-colombianos>
- Ministerio de Educación Nacional. (2025, 19 de diciembre). *Matrícula en instituciones técnicas y tecnológicas públicas crece 37% y se multiplica por cinco la cobertura municipal*. <https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/426886:Matricula-en-instituciones-tecnicas-y-tecnologicas-publicas-crece-37-y-se-multiplica-por-cinco-la-cobertura-municipal>
- Ministerio de Educación Nacional. (2025, julio). *Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES): Datos consolidados de matrícula*. <https://snies.mineducacion.gov.co/portal/ESTADISTICAS/>
- Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) & Federación Colombiana de la Industria de Software y TI (Fedesoft). (2025, 17 de diciembre). *El talento digital como motor de crecimiento: Estudio nacional de brecha 2025-2030*. <https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/425772:El-talento-digital-como-motor-de-crecimiento-Ministerio-TIC-y-FE-DESOFTE-presentan-estudio-nacional-de-brecha-2025-2030>
- Portocarrero Sierra, L. (2025, 25 de junio). *¿Qué hacer ante la nueva ola de la educación TyT?* Universidad.edu.co. <https://www.universidad.edu.co/que-hacer-ante-la-nueva-ola-de-la-educacion-tyt-lorenzo-portocarrero-sierra/>



Política pública de salud mental: Desigualdades, violencias y consumo problemático de sustancias psicoactivas

Mental Health Public Policy: Inequalities, Violence, and Problematic Consumption of Psychoactive Substances

MARÍA DEL PILAR BALANTA-MARTÍNEZ¹

Clasificación PUBLINDEX-MINCIENCIA: Artículo de investigación

Recibido: diciembre 2024

Aceptado: junio 2025

Resumen

El consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye un desafío para las políticas públicas de salud mental en el mundo, este es un asunto que comúnmente se analiza desde enfoques clínicos centrados en las personas, sin embargo, estudios recientes han sugerido la importancia de considerar los determinantes sociales de salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Este artículo derivado de una investigación doctoral analiza la relación entre desigualdades sociales, violencia y consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Se utilizó un diseño cuantitativo con población en tratamiento por adicción a sustancias psicoactivas, los resultados generales muestran una alta presencia de experiencia de violencias a lo largo de la vida entre las personas participantes, a las que han hecho frente desde distintos roles (víctimas, victimarios o testigos), así como condiciones sociales caracterizadas por desigualdades estructurales y temprano inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Estos hallazgos sugieren la necesidad de fortalecer enfoques de política pública que integren la prevención de la violencia y la atención en salud mental en acciones concretas desde los primeros años de vida de las personas y en un sistema intersectorial e interinstitucional que dialogue y coordine permanentemente sus intervenciones.

Palabras clave: Desigualdades sociales, violencias, consumo de sustancias psicoactivas, salud mental, política pública.

Abstract

Problematic substance use poses a challenge to public mental health policies worldwide. This issue is commonly analyzed from person-centered clinical approaches; however, recent studies have suggested the importance of considering the social determinants of health as-

¹ Docente cátedra Universidad del Valle. Trabajadora social, Mg. Políticas Públicas de Universidad del Valle-Colombia. PhD en Salud mental Universidad de Concepción- Chile. Postdoctorante en Educación –Cátedra Iberoamericana de Educación: Universidad de Alcalá -Organización de Estados Iberoamericanos-España. E-mail: maria.p.balanta@correounivalle.edu.co

sociated with psychoactive substance use. This article, derived from doctoral research, analyzes the relationship between social inequalities, violence, and problematic psychoactive substance use.

A quantitative design was used with a population undergoing treatment for psychoactive substance addiction. The overall results show a high prevalence of lifelong experiences of violence among the participants, who have faced it from different roles (victims, perpetrators, or witnesses), as well as social conditions characterized by structural inequalities and early initiation of psychoactive substance use. These findings suggest the need to strengthen public policy approaches that integrate violence prevention and mental health care into concrete actions from the earliest years of life and within an intersectoral and interinstitutional system that fosters ongoing dialogue and coordination of interventions.

Keywords: Social inequalities, violence, psychoactive substance use, mental health, public policy.

Introducción

El consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye uno de los desafíos más complejos para los sistemas sociales contemporáneos; a nivel global diversos organismos internacionales han señalado que el consumo de sustancias psicoactivas representa un problema que afecta a la sociedad en sus dinámicas sociales, económicas y de seguridad. (Organización de Estados Americanos, 2014; Organización Mundial de la Salud, 1990). En este contexto el debate sobre políticas de drogas ha conllevado a modificar los enfoques centrados en el control de consumos y proponer perspectivas que buscan integrar estrategias de prevención, tratamiento y reducción de daños desde la mirada de la salud pública.

En América latina la discusión sobre el consumo de sustancias psicoactivas se encuentra necesariamente vinculada a problemáticas sociales más amplias asociadas a las desigualdades estructurales, las dinámicas de violencia y las limitaciones en el acceso a servicios de salud en general y de salud mental en particular.

Diversos estudios han señalado cómo las trayectorias de consumo problemático no pueden comprenderse exclusivamente desde los factores individuales o biomédicos, sino que se encuentran profundamente influenciados por condiciones sociales que configuran escenarios diferenciados de vulnerabilidad (Medina-Mora et al, 2013; Scopeta & Castaño, 2018).

La violencia constituye una dimensión relevante para el abordaje del tema de consumo de sustancias psicoactivas, considerar el análisis de esta, desde una perspectiva estructural fue una propuesta desarrollada por Johan Galtung, quien propuso distinguir entre la violencia directa violencia estructural y la violencia cultural. En el caso colombiano estas dinámicas adquieren particular atención debido a la coexistencia de múltiples formas de violencia social, comunitaria e interpersonal que se entretienen con el conflicto armado interno.

Investigaciones recientes han señalado que la exposición a violencia se relaciona con mayores prevalencias de trastornos afectivos ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental de la población adulta (Gómez & Restrepo, 2016) en este contexto comprender la relación entre desigualdades sociales, trayectorias de violencia y consumos problemáticos de sustancias resulta fundamental para el diseño de políticas públicas integrales en el campo de la salud mental.

El presente artículo analiza algunas características sociodemográficas, trayectorias de violencia y patrones generales de consumo reportados por las personas participantes con el objetivo de aportar elementos para el diseño de políticas públicas orientadas a la prevención de violencia y la atención en salud mental.

Marco Teórico

Consumo problemático de sustancias psicoactivas

El consumo problemático de sustancias psicoactivas constituye una de las dificultades más retadoras para la salud pública a nivel mundial, según el informe mundial sobre drogas, más de 275 millones de personas consumieron sustancias ilícitas al menos una vez en 2021, y cerca de 36 millones, presentan trastornos asociados al consumo de sustancias psicoactivas (UNODC, 2023). En América latina este fenómeno se cruza con profundas desigualdades sociales, contextos de violencia estructural y limitaciones en el acceso a servicios de atención en salud mental.

Durante décadas el consumo de sustancias psicoactivas, ha sido interpretado principalmente desde perspectivas biomédicas o conductuales centradas en la persona que lo experimenta, sin embargo enfoques contemporáneos de salud pública han señalado la necesidad de comprender el fenómeno desde los determinantes sociales de la salud, reconociendo que las trayectorias de consumo están influenciadas por condiciones sociales económicas y políticas que configuran escenarios diferenciados de vulnerabilidad. (World Health Organization, 2014).

Finalmente (Volkow, Koob y McLellan, 2016) sustentan que los trastornos por el uso de sustancias psicoactivas, derivan de la interacción de los factores biológicos, psicológicos y sociales, por lo que este es un fenómeno complejo donde tanto lo neurobiológico como los determinantes sociales se constituyen en factores de riesgo.

Las violencias

Diversos estudios han mostrado que la exposición a diferentes formas de violencia familiar, comunitaria o interpersonal pueden constituir un factor relevante en la configuración de trayectorias de consumo problemático. Investigaciones sobre experiencias adversas en la infancia han evidenciado que la acumulación de eventos

traumáticos se asocia con mayores riesgos de desarrollar problemas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas en la vida adulta. (Felliti et al, 1998)

Galtung, propuso distinguir entre violencia directa, violencia estructural y violencia cultural; la violencia estructural se manifiesta a través de desigualdades sociales que limitan el acceso a ciertos grupos a recursos fundamentales como la educación, la salud o el empleo. Desde esa perspectiva las desigualdades sociales, no sólo constituyen un problema económico o político, sino también un factor que puede incidir en las condiciones de salud de las poblaciones en América Latina.

La psicología social crítica desarrollada por (Martín Baró, 1988, 1993) aportó una mirada fundamental para comprender la relación entre violencia y salud mental, Baró planteó que los fenómenos psicológicos deben analizarse en relación con las condiciones históricas y sociales en las que viven las personas en contextos marcados por violencia social, desigualdades estructurales y conflictos armados, las experiencias de sufrimiento psicológico no pueden interpretarse únicamente como fenómenos individuales, sino como expresiones de dinámicas sociales más amplias. Desde esa perspectiva las trayectorias de violencia y exclusión social, pueden generar procesos de vulnerabilidad psicosocial que influyen en la aparición de distintos problemas de salud mental, entre ellos el consumo problemático de sustancias.

Determinantes sociales en salud

El enfoque de los determinantes sociales de la salud ha adquirido un papel central en la investigación y la intervención en salud pública. Este enfoque argumenta que en las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen influyen definitivamente en la distribución social de los problemas de salud (World Health Organization, 2008). Desde este punto de vista, los problemas asociados al consumo de sustancias psicoactivas no pueden comprender-

se únicamente como decisiones individuales o como manifestaciones de vulnerabilidad personal, sino que deben analizarse en relación con contextos sociales caracterizados por desigualdades estructurales, pobreza, exclusión social y acceso limitado a recursos institucionales.

En diversos estudios se ha señalado que factores como la precariedad laboral, las trayectorias educativas interrumpidas y la marginalización social pueden influir significativamente en los patrones de consumo y en el desarrollo de trastornos por uso de sustancias (Rehm & Shield, 2019; Degenhardt et al., 2018).

Investigaciones en epidemiología social han documentado la relación entre violencia comunitaria, marginalización socioeconómica y consumo de drogas en diferentes contextos urbanos (Richardson et al., 2015).

Políticas públicas de salud

Las políticas públicas de salud, hacen referencia a las decisiones y estrategias definidas por el Estado y otros actores sociales para atender los aspectos enmarcados en este sector, (Varela, 2005) especifica que no solo se trata de decisiones técnicas, sino de procesos complejos que incluyen lo político y lo administrativo.

Para el caso de las políticas de drogas, los organismos internacionales han promovido un cambio de paradigma orientado hacia enfoques de salud pública y derechos humanos (United Nations Office on Drugs and Crime, 2023), transitando de los modelos únicamente punitivos hacia estrategias integrales que incluyan prevención, tratamiento, reducción de daños y fortalecimiento de los sistemas de salud mental.

En este sentido, diversos estudios han señalado que el diseño de políticas públicas orientadas al consumo de sustancias debe incorporar una perspectiva intersectorial que articule salud pública, inclusión social, prevención de la violencia y fortalecimiento de las redes comunitarias (Medina-Mora et al., 2013; Scoppetta & Castaño, 2018).

En el caso colombiano, estas discusiones adquieren especial relevancia debido a la interacción entre desigualdades sociales, violencia asociada al conflicto armado y dinámicas urbanas de violencia social. Investigaciones recientes han señalado que la exposición a violencia puede tener efectos significativos en la salud mental de la población y en la aparición de conductas de riesgo, incluyendo el consumo problemático de sustancias (Gómez-Restrepo et al., 2016).

Metodología

El presente artículo se deriva de una investigación doctoral orientada a analizar la asociación entre exposición a violencia y severidad a la adicción a sustancias psicoactivas. Se empleó un método cuantitativo analítico con población adulta en tratamiento por consumo problemático de sustancias psicoactivas las personas participantes se encontraban vinculadas a instituciones de tratamiento en adicciones en los departamentos del Valle del Cauca y de Antioquia. La recolección de información incluyó variables socio demográficas y la aplicación de cuatro instrumentos orientados a medir la exposición a diferentes formas de violencia a lo largo de la vida, así como indicadores de la severidad del consumo de sustancias psicoactivas, riesgo de violencia y el estado de salud mental. Se utilizaron los instrumentos CIDI2.0 y ASI 6.0 para valorar salud mental y severidad de la adicción, se utilizó HCR20 para valorar riesgo de violencia.

Resultados descriptivos

Un poco más del 50% de la población participante se ubica en el rango entre los 18 y los 32 años, lo que indica que son personas de ciclo vital joven y adulto joven, este hallazgo coincide con estudios internacionales que señalan que los trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas suelen presentarse con mayor frecuencia en etapas tempranas y en relación con el sexo, la mayoría de las personas participantes corresponde a hombres (92,5%), aunque también se identificó la presencia de

mujeres(7,5%) en tratamiento por consumo problemático de sustancias. Ese hallazgo refleja una tendencia ampliamente documentada en la literatura sobre adicciones donde históricamente los hombres han presentado mayores prevalencias de consumo problemático, no obstante investigaciones recientes han señalado un incremento progresivo en la participación de mujeres en esos contextos.

Tabla 1. Edad de participantes

Rango de Edad (Años)	Porcentaje (%)
18 - 25	25,80%
25 - 32	28,30%
32 - 39	22,50%
40 - 47	5,80%
47 - 54	10,80%
54 - 61	5,00%
61 - 76	1,70%
Total	100%

Fuente: elaboración propia

Respecto a la ocupación, se precisa que todas las personas se encontraban internos en proceso de tratamiento, sin embargo, previo al inicio del proceso, ellas habían perdido sus empleos o realizaban labores de carácter informal, esto coincide con cifras del DANE en referencia a ocupación juvenil, según el cual, hubo una tasa de desempleo juvenil del 14,2% quienes tienen mayor inestabilidad laboral, menores ingresos y constituyen un grupo amplio de trabajadores informales. (DANE 2024)

El consumo de sustancias psicoactivas identifica al alcohol y la marihuana como sustancias usadas a lo largo de la vida con un porcentaje alto, con edad de inicio entre los 14 y los 16 años, lo cual coincide con lo reportado por los estudios nacionales.

Tabla 2. Consumo de sustancias psicoactivas a lo largo de la vida

Sustancia	Prevalencia de Vida	
	Frecuencia	Porcentaje
Alcohol Etílico	111	93%
Cannabis	100	84,7%
Coca	95	80,5%
Tabaco	81	69,2%
Inhalables	60	50%
Sedantes	44	36,7%
Basuco	38	32%
Alucinógenos	30	25%
Otras sustancias	29	24,2%
Opiáceos	28	24%
Anfetaminas	19	16%
Alcohol Antiséptico	14	11,7%
Marihuana Cripa	5	4,2%

Fuente: elaboración propia

La población joven ha sido reportada por el Observatorio Nacional de Drogas, quien indicó que el consumo de sustancias psicoactivas se concentra principalmente en población joven en donde cerca del 80% de ésta, presentó una prevalencia de vida de alcohol como sustancia legal y un 15% de marihuana como sustancia ilícita.

Una proporción importante reportó haber vivido situaciones de violencia en distintos momentos de su vida, lo que sugiere la presencia de procesos acumulativos de vulnerabilidad social; esas experiencias no se limitan a episodios aislados de violencia interpersonal, sino que se insertan en contextos sociales caracterizados por desigualdades estructurales y condiciones de precariedad socioeconómica como por ejemplo trayectorias educativas interrumpidas y altos niveles de inestabilidad laboral. Entre las personas participantes, estas condiciones reflejan procesos de exclusión social que pueden limitar las oportunidades de acceso a recursos sociales económicos y sanitarios.

Los resultados descriptivos evidencian una proporción importante de las personas participantes reportó experiencias de violencia en diferentes momentos de su trayectoria de vida y en diferentes roles como víctimas, como victimarios o como testigos, igualmente, los diferentes escenarios donde se presentaron esas situaciones de violencia en la casa en el barrio o en la calle. Para las mujeres, por ejemplo, se presentó que el hogar para el 55% de ellas, fue el lugar donde fueron víctimas de violencia, aunque el 88% se reconoció como víctima a lo largo de su vida, victimarias el 66% y testigos de violencia el 78%. El ámbito doméstico como el principal escenario de victimización de las mujeres, resulta consistente con los estudios nacionales e internacionales que reconocen el hogar como un lugar de peligro para muchas mujeres.

Según el Instituto de Medicina Legal en su informe (Forensis, 2022) reportó 113.000 homicidios en donde casi el 55% de las víctimas se encontraban entre 18 y 34 años, siendo la mayoría de estos hombres. En cuanto a lesiones personales de 150.000 casos, el 40% se encontraba en este rango de edad y de los 70.000 casos de violencia intrafamiliar, fueron las mujeres entre 20 y 34 años las más afectadas.

Se identificaron condiciones sociales asociadas a desigualdades estructurales entre ellas trayectorias educativas interrumpidas, solo un 30% de las personas había culminado sus estudios de bachillerato y un 17% tuvo formación técnica, el resto de la población había terminado solo la primaria y un grupo muy pequeño había tenido formación universitaria. Resultó inquietante que refirieron como elemento común la ausencia de la figura paterna o su presencia problemática en el proceso de crianza de las personas participantes en el estudio.

Las redes de apoyo son clave en los procesos de recuperación de los consumos problemáticos y adicciones a las drogas, en el estudio se evidenciaron condiciones de soledad en un amplio grupo de las personas entrevistadas.

Tabla 3. Estado civil

Estado civil	Porcentaje
Unión Libre	13%
Soltero	70%
Divorciado	3%
separado	4%
Viudo	2%
Casado por segunda vez	1%
Casado	3%
No informa	4%
Total	100%

Fuente: elaboración propia

Respecto a Estado civil, 70% de las personas eran solteras, 13% se encontraban en unión libre, 7% estaba divorciado o separado y un 4% estaba casado. Resulta relevante señalar que la ausencia de un vínculo de pareja puede estar asociado a las condiciones de consumo problemático que vivieron las personas entrevistadas y que posiblemente obedecen a las dinámicas que se dan por los patrones de consumo que se constituyen.

Implicaciones para la política pública

Los hallazgos presentados en ese estudio sugieren la necesidad de fortalecer enfoques integrales en el diseño de políticas públicas orientadas al abordaje consumo problemático de sustancias psicoactivas, tradicionalmente las políticas de drogas han estado orientadas estrategias centradas en el control del consumo o en la intervención clínica individual, sin embargo la evidencia acumulada en las últimas décadas indica que estos enfoques resultan insuficientes para abordar la complejidad de las trayectorias sociales asociadas al consumo problemático de sustancias.

En primer lugar, los resultados evidencian la importancia de fortalecer la política de prevención de la violencia en la infancia y la adolescencia, la presencia de experiencias de violencia en etapas tempranas del ciclo vital sugiere la

necesidad de desarrollar estrategias intersectoriales que articulen educación, salud mental y protección social, y que una intervención activa en los procesos familiares puede contribuir de manera importante en las interacciones no violentas tanto al interior del grupo familiar, como de este con otros entornos como el escolar y el comunitario principalmente.

En segundo lugar, los hallazgos resaltan la necesidad de avanzar hacia modelos de atención en salud mental, basados en determinantes sociales de la salud, esto implica reconocer que el consumo problemático de sustancias psicoactivas se encuentra vinculado condiciones estructurales como la pobreza y la exclusión social la precariedad laboral y que las intervenciones deben incorporar estrategias orientadas a reducir estas desigualdades.

En tercer lugar, los resultados sugieren la importancia de fortalecer estrategias comunitarias de prevención y atención que promuevan la participación social y fortalecimiento de redes de apoyo comunitarias, diversas investigaciones han señalado que los entornos sociales comunitarios desempeñan un papel fundamental en las experiencias de prevención tratamiento y recuperación asociadas al consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Finalmente, desde una perspectiva de salud pública, resulta necesario avanzar hacia políticas de drogas que integren enfoque de reducción de daños atención integral promoción de la salud mental reconociendo la interacción entre violencia, desigualdades sociales y consumo de sustancias psicoactivas.

En el contexto colombiano estas reflexiones adquieren particular importancia a la luz de los desarrollos recientes en política pública, relacionados con salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas; el Ministerio de salud y Protección social de Colombia a través del plan decenal 2022-2031, ha explicitado la importancia de fortalecer el enfoque de determinantes sociales de la salud y promover intervenciones

intersectoriales orientadas a la prevención de la violencia, la promoción de bienestar mental y la reducción de inequidades sociales de manera complementaria.

Además, el gobierno de Colombia ha impulsado la Política Nacional de Drogas 2023-2033 Sembrando vidas cerramos el narcotráfico, con la que se propone transitar hacia un enfoque centrado en derechos humanos, la salud pública y el desarrollo territorial.

Estas orientaciones reconocen que el fenómeno del consumo de sustancias psicoactivas, no puede abordarse únicamente desde estrategias de control, sino que requiere intervenciones integrales que articulen la salud mental, la inclusión social, la prevención de la violencia y el fortalecimiento comunitario. En ese sentido los resultados presentados en este estudio aportan evidencia que refuerza la necesidad de avanzar hacia políticas públicas integrales en estas dimensiones y que reconozcan la relación entre desigualdad social, las trayectorias de violencia consumo problemático de sustancias psicoactivas. Principio del formulario

Discusión

La aproximación entre experiencia de violencia y desigualdades sociales conforma contextos de vulnerabilidad que influyen en los procesos de salud mental y pueden contribuir a desarrollar las dinámicas de consumo problemático de sustancias.

Los hallazgos descriptivos del estudio son consistentes con la literatura internacional sobre determinantes sociales de la salud la cual señala que las desigualdades sociales y la exposición a violencia constituyen factores relevantes en la comprensión del consumo problemático de sustancias psicoactivas.

La presencia de trayectorias de violencia a lo largo de la vida sugiere la necesidad de fortalecer estrategias de prevención que integren

enfoques de la salud mental construcción de paz y reducción de desigualdades sociales.

En ese sentido la exposición a contextos de pobreza precariedad laboral o limitación en el acceso a servicios de salud puede incidir en la aparición de diferentes problemas de salud mental incluyendo el consumo problemático de sustancias psicoactivas, por otra parte los planteamientos de la psicología social crítica desarrolladas por (Baró 1988,1993) permiten analizar la experiencia de las personas participantes en el estudio y que hacían parte de los departamentos con municipios priorizados para el postconflicto y que en sus narrativas permitieron identificar su tránsito entre los distintos roles de violencia, las experiencias de sufrimiento psicológico en contextos de violencia no pueden analizarse únicamente como fenómenos individuales en sociedades caracterizadas por conflictos sociales y desigualdades persistentes la violencia constituye un fenómeno estructural que impacta profundamente las trayectorias de vida a las personas en ese sentido los resultados del estudio sugieren que las trayectorias de violencia y exclusión social pueden contribuir a la configuración de contextos de vulnerabilidad psicosocial en los que el consumo de sustancias psicoactivas aparecen como una estrategia de afrontamiento frente a experiencias de trauma, estrés o sufrimiento emocional; estos hallazgos refuerzan la necesidad de abordar el consumo problemático desde fuentes reales que incorporen no solo intervenciones clínicas sino también estrategias orientadas a reducir las desigualdades sociales fragilidad frente a formas de violencia presente en los territorios.

Conclusiones

Este estudio precisa que la adolescencia se constituyó en un momento favorable, tanto para el inicio en el consumo de sustancias psicoactivas, como para el primer incidente de violencia en el rol como victimarios de quienes participaron de la investigación lo que resulta coincidente con la literatura que reconoce la baja percepción de riesgo que se tiene en esta fase del ciclo vital.

El consumo problemático de sustancias psicoactivas debe analizarse en relación con contextos sociales más amplios, las desigualdades sociales y las trayectorias de violencia, constituyen dimensiones clave para comprender las dinámicas del consumo para orientar las políticas públicas integrales en el campo de la salud mental.

Referencias

- Balanta-Martínez, M. del P. (2021). Tesis doctoral: Asociación entre exposición a violencias y severidad de la adicción a sustancias psicoactivas estudio transversal multicéntrico con personas adultas en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia-Colombia poseedores de municipios priorizados para el posconflicto con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia. Universidad de Concepción.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). *Mercado laboral de la juventud en Colombia*.
- Degenhardt, L., Charlson, F., Ferrari, A., Santomauro, D., Erskine, H., Mantilla-Herrera, A., & Vos, T. (2018). The global burden of disease attributable to alcohol and drug use in 195 countries and territories, 1990–2016. *The Lancet Psychiatry*, 5(12), 987–1012.
- Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., & Marks, J. S. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245–258.
- Galtung, J. (1969). Violence, peace, and peace research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.
- Gómez-Restrepo, C., Tamayo-Martínez, N., Bohórquez-Peña, A., Rengifo, H., Rondón, M., & Medina-Mora, M. E. (2016). Violencia y salud mental en Colombia. *Revista Colombiana de Psiquiatría*.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2022). *Forensis: Datos para la vida*.
- Martín-Baró, I. (1988). *Psicología de la liberación*. UCA Editores.

- Martín-Baró, I. (1993). *Writings for a liberation psychology*. Harvard University Press.
- Medina-Mora, M. E., Real, T., Villatoro, J., & Natera, G. (2013). Las drogas y la salud pública: ¿Hacia dónde vamos? *Salud Pública de México*.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2022). *Plan Decenal de Salud Pública 2022–2031*.
- Observatorio de Drogas de Colombia. (2022). *Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas en Colombia*.
- Organización de Estados Americanos. (2014). *El problema de las drogas en las Américas*.
- Organización Mundial de la Salud. (1990). *Composite International Diagnostic Interview (CIDI)*.
- Organización Mundial de la Salud. (2008). *Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health*.
- Rehm, J., & Shield, K. (2019). Global burden of alcohol use disorders and alcohol liver disease. *Biomedicine*, 7(4).
- Richardson, L., Kerr, T., Nguyen, P., Wood, E., & DeBeck, K. (2015). Sociodemographic factors and patterns of drug use among marginalized populations. *Drug and Alcohol Dependence*.
- Scoppetta, O., & Castaño, G. (2018). Consumo de drogas y determinantes sociales en América Latina. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales*.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *World drug report 2023*.
- Volkow, N. D., Koob, G. F., & McLellan, A. T. (2016). Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. *New England Journal of Medicine*, 374(4), 363–371.
- Varela, E. (2005). *Políticas públicas y gestión pública*. Escuela Superior de Administración Pública.



Instrucciones a los autores

La Revista de Administración Pública del GLAP. RAP-GLAP es una publicación periódica semestral de carácter científico, disciplinario y temático de las ciencias administrativas que tiene por objetivo principal la divulgación de estudios tratados con rigor conceptual y metodológico, de interés para la comunidad académica en los procesos de enseñanza de pregrado, postgrado, la investigación y la extensión. Procura ser un escenario de debate de las tendencias nacionales e internacionales, aportando a la consolidación de las disciplinas de estudio y recibe contribuciones en español, inglés, francés y portugués.

Políticas editoriales

La Revista de Administración Pública del GLAP. RAP-GLAP, publica artículos científicos originales e inéditos, es decir, que no hayan sido publicados previamente en ningún medio impreso, electrónico o digital (otras revistas, memorias de congresos, portal Web, CD-ROM) y que no estén sometidos a otra publicación. Los artículos se aceptan para publicación definitiva después de un proceso riguroso de revisión de su calidad y pertinencia académica, conforme a evaluación de árbitros externos a la revista. La revista se produce únicamente en formato digital.

Parágrafo: Casos especiales

Para el caso de los investigadores que hayan participado como autores de un artículo publicado en la revista y que deseen someter otro manuscrito a una nueva convocatoria, sólo podrán realizarlo si ha transcurrido mínimo un año desde la última publicación o el equivalente a dos ediciones. Si en una misma convocatoria se reciben dos o más manuscritos donde figure un mismo autor o más, se debe tener en cuenta que

sólo se publicará uno en caso de que estos cumplan con los requisitos técnicos de publicación; la selección dependerá de la evaluación que hagan los miembros del Comité Editorial con base en los siguientes criterios:

- Promedio de las notas de las evaluaciones emitidas por los pares.
- Orden en el cumplimiento con el proceso de evaluación, el cual concluye con el visto bueno final de los árbitros de la versión corregida por los autores, donde se valida que se acogieron las recomendaciones o se dio claridad sobre las observaciones emitidas por la Revista con base en la evaluación de los pares y se confirma la pertinencia para la publicación.
- Pertinencia, actualidad e interés del manuscrito.

Líneas temáticas

- Administración pública
- Políticas públicas.

Secciones

Los manuscritos aceptados para evaluación y posible publicación corresponden a la clasificación del Índice Bibliográfico Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas de Colombia (PUBLINDEX- COLCIENCIAS), a continuación, se describen según tipología:

Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que presenta de manera detallada, los resultados originales de proyectos terminados de investigación; estructura: 1. Introducción 2. Marco teórico. 3. Metodología 4. Resultados y discusión 5. Conclusiones 6. Referencias 7. Se puede incluir una sección adicional para agradecimientos.

Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales; estructura: 1. Introducción 2. Marco teórico 3. Discusión 4. Referencias.

Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de la literatura existente (por lo menos 50 referencias); Estructura: 1. Introducción 2. Marco teórico 3. Desarrollo teórico 4. Referencias.

Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en particular.

Estudio de caso. En el estudio de caso se presentan y describen los resultados de un estudio sobre una situación particular para dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas y el material obtenido al trabajar con un individuo, organización o situación específica, para describir un problema o indicar cómo resolverlo.

Cartas al editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la revista, que a juicio del Comité Editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por parte de la comunidad científica de referencia.

Editorial. Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.

Políticas de evaluación

- El proceso de evaluación en su primera etapa lo realiza el Editor en Jefe quien seleccionará los manuscritos que cumplan con los criterios metodológicos y de contenido temático de la revista.

- El Editor en jefe es responsable del proceso de publicación de los artículos y del estado de evaluación de cada uno de ellos.
- El Editor en jefe y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar o no los manuscritos para evaluación y publicación. Esta decisión se basa en factores como: Políticas y criterios establecidos, los conceptos de los árbitros, las necesidades de material apropiado para los lectores de la Revista de Administración Pública del GLAP, las prioridades determinadas por el grupo editorial, la calidad de los manuscritos en consideración y la importancia actual del tema tratado.
- Los manuscritos preseleccionados se envían a evaluación por dos árbitros que son seleccionados por su reconocida experiencia en el tema, son investigadores activos con vinculación académica de diversas instituciones de educación superior nacional e internacional y con publicaciones en revistas indexadas relacionadas con la línea temática.
- La decisión definitiva de publicar los manuscritos requiere la evaluación mínima de dos (2) árbitros, con una calificación no menor de tres (3) para cada evaluación y sumadas las dos evaluaciones el promedio no puede ser inferior a tres con cinco (3.5)
- El rechazo o sugerencias de modificación se comunicará al autor(es). En el caso de las modificaciones, tendrá un plazo de diez (10) días calendario para aceptar las sugerencias y en consecuencia, enviar la versión definitiva del manuscrito para nueva revisión.

Políticas de propiedad intelectual

El autor (es) garantiza que el manuscrito que somete para posible publicación es de su autoría y que no infringe ningún derecho de autoría de terceros, ya sean de propiedad industrial o derecho de autor, o cualquier otro y, garantiza asimismo que, el contenido de las obras no atenta contra los derechos al honor, a la intimidad y a la imagen de terceros. El autor(es) como garante de la autoría del manuscrito, asume toda reclamación por responsabilidad civil o penal, incluyendo las

indemnizaciones por daños que pudieran ejercitarse contra la revista por terceros que vieran infringidos sus derechos e intereses a causa de cualquier reclamación de autoría intelectual. La obra se pondrá a disposición de los usuarios para que hagan de ella un uso honrado no violatorio de los derechos de autor, según lo permitido por la legislación aplicable nacional e internacional, especialmente por lo previsto en la Ley 23 de 1982 (Ley de Derechos de Autor en Colombia), sea con fines de estudio, investigación, o cualquier otro fin lícito, de modo que siempre se cite su autoría y no se obtenga beneficio comercial. La revista, con el ánimo de ser partícipe de las nuevas formas de difusión de información y permitir un acceso abierto de sus contenidos a los usuarios, cuenta con la Licencia “*Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia*”.

Requisitos técnicos del artículo

Extensión del documento. Entre 6.000 y 8.000 palabras incluyendo resúmenes, títulos y palabras clave, ilustraciones (cuadros, tablas, gráficos y otros), referencias bibliográficas y notas rodapé (evitar o utilizar).

Resumen de mínimo 150 palabras y máximo de 250 palabras, títulos con 12 palabras e indicación de 3 a 5 palabras.

Notas de rodapé: evitar o utilizar notas de rodapé. Para quienes no estén de acuerdo, recomendamos incluir una explicación extensa sin mensaje de texto.

Espaciado y márgenes. Párrafos con interlineado de espacio y medio (1.5 líneas) y márgenes de 3 cm en todos los lados.

Tipo y tamaño de la letra. Los títulos y subtítulos inician con letra mayúscula y van con numeración consecutiva. Letra Arial 12 puntos para el texto, títulos y subtítulos; Arial 10 puntos para las citas de los pies de página y fuentes de tablas, gráficas y figuras.

Tablas, gráficas y figuras. Se citan dentro del texto con numeración consecutiva para cada tipo, especificar el título y la fuente de elaboración siguiendo el estándar de la citación en APA 6^a

versión (American Psychological Association). En caso de ser elaboración propia de los autores, se sigue la misma regla.

Referencias y citas bibliográficas. Para las fuentes consultadas utilizar las Normas APA 6a versión.

Orden del manuscrito

1. Cabeza del documento: título, resumen y palabras clave en el idioma original y con traducción en inglés (keywords).
2. Tablas, gráficas y figuras van al final con su respectiva citación dentro del texto.
3. Anexos
4. Referencias en orden alfabético.
5. Documentos adjuntos: Carta de certificación de originalidad y cesión de derechos, formato de autores y formato datos del artículo.

Estructura de los artículos

Cabeza del documento

El título debe ser preciso, concordante con el contenido del trabajo y procurar no exceder de palabras. En lo posible, el título no debe hacer uso de abreviaturas o acrónimos. Incluir en el idioma original y traducido al inglés.

Información de los autores. Incluir los nombres completos y los apellidos de cada autor. En nota al pie de la primera página con un asterisco el primer autor, doble asterisco para el segundo, y así sucesivamente. Adicionar los datos principales de cada autor en el siguiente orden: a. Cargo, departamento, facultad, universidad, ciudad y país. b. Título académico de pregrado y último título obtenido, los cuales deben contener el nombre de la institución, ciudad y país. c. Nombre del grupo de investigación, categoría según Colciencias (si aplica), institución, ciudad y país. d. Correo electrónico institucional.

Resumen analítico. Explica el desarrollo del manuscrito en su temática, detallando antecedentes, metodología, consecuencias y resultados. Es un análisis resumido de los conceptos, planteamientos e ideas fundamentales, siguiendo la

estructura del texto original, destacando sus elementos esenciales y manteniendo la idea principal. Debe tener como mínimo 150 palabras y máximo 250 con traducción al inglés (*Abstract*).

Palabras clave. Son las que identifican la temática desarrollada en el artículo, listadas en el idioma original, con traducción al inglés. Deben ser mínimo cuatro y máximo siete palabras separadas por comas.

Texto principal del manuscrito. Se recomienda una redacción con estilo, escrito en tercera persona, observar las reglas ortográficas generales y la tilde para las mayúsculas; las expresiones en otro idioma o voces extranjeras van en letra cursiva (p.e., *ad honorem*). El cuerpo del manuscrito debe cumplir de forma obligatoria con las secciones enunciadas para cada modalidad como se explica a continuación: *Introducción.* Se indicará el propósito y se realizará de forma resumida una justificación del estudio. En esta sección únicamente se incluirán las referencias bibliográficas estrictamente necesarias y no se introducirán datos o conclusiones. *Resultados.* Presenta en forma argumentada los resultados del estudio, con tablas, gráficas y figuras en una secuencia lógica. Evitar en el cuerpo del texto la reiteración de datos graficados en tablas, figuras o gráficas. *Tablas.* Se deben presentar en el programa original; con numeración consecutiva en el orden de su primera citación dentro del texto; el título breve; la explicaciones precisas se podrán en notas a pie de tabla identificadas con numeración consecutiva, no en la cabecera. En estas notas se especificarán las abreviaturas no usuales empleadas en cada tabla; cada tabla se cita en el texto; para datos publicados o no procedentes de otra fuente, se contará con la autorización necesaria para reproducirlos. Si la tabla ya fue publicada, citar la fuente original y presentar el permiso escrito del titular de los derechos de autor para la reproducción del material. Esta autorización es necesaria, independiente de quien sea el autor o editorial, se establece como excepción al derecho de autor cuando se toma de documentos de dominio público, pero siempre debe citarse el autor original. *Discusión.* En el cuerpo del trabajo se

consignan los aspectos nuevos e importantes del estudio y las conclusiones que se deriven de ellos. No se debe repetir en forma detallada los datos u otras informaciones ya incluidas en los apartados de introducción y resultados. Explicar el significado de los resultados, las limitaciones del estudio, así como sus utilidades y valores en futuras investigaciones. Se compararán las observaciones realizadas con las de otros estudios pertinentes. *Conclusiones.* Se deben relacionar con los objetivos y evitar afirmaciones y conclusiones que no estén demostradas o poco fundamentadas por los datos. No se citarán trabajos sin terminar. Se pueden proponer nuevas hipótesis cuando esté justificado, pero se deben identificar claramente como tales. Se podrán incluir recomendaciones cuando sea oportuno. *Abreviaturas.* Utilizar únicamente abreviaturas normalizadas; evitar las abreviaturas en el título y en resumen. Cuando en el texto se emplee por primera vez una abreviatura, ésta irá precedida del término completo, salvo si se trata de una unidad de medida común. *Citas bibliográficas.* Se identifican dentro del texto, tanto de artículos como de libros, se harán mediante el uso de paréntesis siguiendo las normas APA (American Psychological Association) 6a edición que se explica en esta guía. *Referencias bibliográficas.* Todos los manuscritos deben seguir las Normas APA versión 6a edición. Se incluirán al final del documento en orden alfabético sin numeración y con sangría francesa, listando únicamente a los autores citados dentro del texto. Cuando sea necesario incluir varios artículos de un mismo autor, se deben escribir en orden por el año de publicación del más antiguo al más reciente.

Las Normas APA 6a edición y su utilización

Las políticas de calidad editorial y respeto a los derechos de propiedad intelectual en la revista RAP-GLAP demanda la utilización del Manual de Publicación APA, 6ª edición. Por ello, y con el ánimo de ejercer una labor pedagógica con los autores, se presenta una breve reseña del uso correcto de este sistema a través de ejemplos.

Citas textuales dentro del cuerpo del artículo. Al citar dentro del cuerpo del artículo: Si la citación tiene menos de 40 palabras. Se debe poner entre comillas la cita, precedida de la referencia, así: González (2011) sostiene que "Al integrar las anteriores propuestas y al tener en cuenta la producción intelectual existente en la teoría de red, es posible reconocer tres niveles de análisis - Organización, Red y Toda la red". Respecto a esto... (p. 14) ... "Al integrar las anteriores propuestas y al tener en cuenta la producción intelectual existente en la teoría de red, es posible reconocer tres niveles de análisis - Organización, Red y Toda la red" (González, 2011, p. 14).

Citación de más de 40 palabras. El bloque se debe presentar con letra Arial 10, a espacio sencillo, sin comillas, comenzando en otro párrafo y dejando cinco espacios del margen izquierdo, así:

De este modo plantea que:

No obstante, el análisis de redes sociales es una herramienta interesante en la caracterización de una red empresarial, mediante la integración del análisis sociométrico y la teoría de grafos, que son utilizadas tradicionalmente por varias disciplinas para estudiar la estructura de los vínculos y las relaciones de toda la red empresarial en su conjunto. En este análisis es posible incluir gráficamente los componentes, las propiedades y la naturaleza de las organizaciones que componen la red empresarial (González, 2011, p. 16).

Citas directas de material en línea sin paginación. Generalmente las citas directas de material online proveen autor, año y número de páginas entre paréntesis. Muchas fuentes electrónicas no incluyen números de página. Si el número de párrafo es visible se debe utilizar en lugar del número de página, utilizando la abreviatura para:

González (2011) plantea que "Al integrar las anteriores propuestas y al tener en cuenta la producción intelectual existente en la teoría de red, es posible reconocer tres niveles de análisis - Organización, Red y Toda la red" (para. 4).

Si el documento incluye subtítulos pero sin número de página ni párrafos, cite el subtítulo y luego el número de párrafo de la siguiente forma:

González (2011) plantea que "Al integrar las anteriores propuestas y al tener en cuenta la producción intelectual existente en la teoría de red, es posible reconocer tres niveles de análisis - Organización, Red y Toda la red" (Metodología, para. 2).

Cambios en la cita que requieren explicación

Omitiendo material. Para indicar que ha omitido material de la fuente original utilice tres puntos suspensivos espaciados (. . .), por ejemplo:

Los avances en las áreas de la psicología, la neurociencia, el ámbito cognitivo y la comprensión (. . .) formulen nuevas teorías. Este es el caso del marketing (Avendaño, 2013, p. 17). Use cuatro puntos para indicar cualquier omisión entre dos oraciones. ... el primer punto indica la finalización de la primera oración citada y los . . . indican la siguiente. Por ejemplo: Los avances en las áreas de la psicología, la neurociencia, el ámbito cognitivo y la comprensión sobre el funcionamiento del cerebro humano han posibilitado que otras disciplinas y áreas del conocimiento formulen nuevas teorías. . . Se aplicó una matriz que recopiló la información sobre la imagen externa e interna de los establecimientos atendiendo al uso del color, la luz y la imagen fotográfica. Los resultados muestran que un buen porcentaje de los establecimientos aplican los principios del neuromarketing asociados con la percepción sobre el color, la luz y la imagen fotográfica (Avendaño, 2013, p. 17). No use puntos suspensivos al principio de cualquier citación a menos que, para prevenir malas interpretaciones, se necesite enfatizar que la citación inicia o termina en el medio de la oración. Por ejemplo: "Los avances en las áreas de la psicología, la neurociencia, el ámbito cognitivo y la comprensión sobre el funcionamiento del cerebro humano han posibilitado que otras disciplinas y áreas del conocimiento formulen nuevas teorías. . ." (Avendaño, 2013, p. 17).

Insertando material. Use corchetes, no paréntesis, para incluir explicaciones adicionales

que no sean parte de la citas original. Énfasis en una palabra(s): si usted quiere enfatizar una palabra(s) en la oración ésta debe de ir en *itálica*. Inmediatamente después inserte entre corchetes la frase [énfasis], de la siguiente forma: En la presente investigación, que se enmarca dentro de la economía y las finanzas, se estima la prima de riesgo por inflación para Colombia a partir de las expectativas de inflación proporcionadas por el indicador Break Even Inflation (BEI) [énfasis]. Los modelos utilizados en estudios anteriores de este tipo son estructuralmente complejos en la medida que no son parsimoniosos, pues el número de parámetros a estimar es alto y de difícil comprensión y se concentran en la medición de las expectativas de inflación (Ríos, 2013 p. 28).

Cita dentro de citas. No omita citaciones embebidas dentro del material original que se está citando. El trabajo citado no necesita ser incluido en la lista de referencias (a menos que se cite como fuente primaria en otro lugar del documento).

“Surgen diversos criterios de clasificación de las condiciones laborales, que tienen que ver con el ambiente físico y social, de organización y las demandas cuantitativas y cualitativas, exigencias de rol, cargas y tiempos de trabajo que afectan la salud, la seguridad, al tipo y calidad del contrato laboral, y es lo que se denomina como Bienestar Laboral (Casales, 2003)” (Restrepo y López, 2013, p.66).

Publicación por autor. El método de citación requiere que el apellido del autor y la fecha de publicación sean insertados en el texto así: 122 Cuadernos de Administración / Universidad del Valle García (2011) sugiere que las redes... En un estudio reciente (Rodríguez, 2011), sugiere que las redes... Desde 2011, Ceballos sugiere que las redes... En un estudio reciente, Zapata (2011) sugiere que las redes ... también recomienda la modificación...

Publicación con más de un autor. Si se trata de dos autores, siempre que se parafrasee o se haga una cita textual, ambos se mencionan; en caso que sean 3 o más, se menciona el grupo de autores en la primera citación, pero en las siguientes se utiliza solo el apellido del primer autor seguido por la expresión et al. así: Murillo,

Zapata, Martínez, Ávila, Salas y López (2007) encontraron datos... En su investigación, Murillo et al. (2007) concluyeron... Si dos referencias con más de tres apellidos y mismo año su citación en la misma cite los apellidos de los autores siguientes hasta que se diferencie seguido por coma y et al. Así: Ceballos, Rodríguez, González, et al. (2012) Ceballos, Rodríguez, González, Murillo, et al. (2012)

Utilización del &. Cuando se hace una citación en el cuerpo del texto en un artículo en inglés los apellidos de los autores deben estar separados por la palabra and; Si la cita aparece entre paréntesis en tablas, leyendas y en la lista de referencias separe los apellidos con un ampersand &. En caso de que el artículo sea escrito en español u otro idioma distinto al inglés, sólo se utilizará el ampersand en la lista de referencias y si se mencionan a los autores en una cita entre paréntesis. Por ejemplo: Carvajal, J. G., & Dávila, C. A. (2013). Mobbing or workplace harassment. Review of the issue in Colombia. Cuadernos de Administración, 29 (49), 85-9. Cabarcas, A., Martelo, R. J., y Tovar, L. C. (2013). Software para mejorar la aplicación de técnicas cuantitativas en estudios prospectivos. Cuadernos de Administración, 29 (49), 63-73.

Instituciones como autores. Mencionar siempre el nombre completo de la institución; sin embargo, es posible usar el correspondiente acrónimo siempre y cuando se mencione entre corchetes en la primera cita, de la siguiente forma: La American Psychological Association (APA) (2001) plantea que... APA (2001) menciona dentro de su Manual de Publicación que las tablas...

Autores con el mismo apellido. Si la lista de referencias contiene publicaciones de dos o más autores primarios con el mismo apellido, se debe poner las iniciales del primer autor en todas las citaciones del texto, incluso si el año de publicación es diferente. Las iniciales ayudan al lector evitar confusiones dentro del texto y a localizar las citas en la lista de referencias así:

Cita en el documento Algunos estudios de S. L. García (2012) y de M. García (2012) señalan que...

García, S. L. (2012). Esquematización del funcionamiento tácito de un sistema de educación superior virtual en México. Cuadernos de Administración, 28 (47).

1. García, M. (2012). Caracterización del comportamiento de las Pymes según el género del gerente: un estudio empírico. Cuadernos de Administración, 28 (47).

Trabajos con un autor no identificado con autor anónimo. Cuando una cita no tiene un autor identificado cite unas las primeras palabras de la referencia en la lista (usualmente el título) y el año. Use comillas para indicar el título de un artículo un capítulo o una página web y use itálicas para una revista, libro, folleto o un reporte:

Los estudios señalan (“Dinámica del desempeño”, 2012)... Según lo que se indica en El humanismo administrativo (2007) Cuando el autor de un trabajo es designado “Anónimo”, cite en el texto la palabra Anónimo seguido por una coma y el año. En la lista de referencias el trabajo es alfabetizado con la palabra Anónimo.

Dos o más publicaciones dentro del mismo paréntesis. Cuando una cita tiene varios autores en un mismo paréntesis, ubique los autores en orden alfabético tal y como aparece en la lista de referencias (incluyendo referencias que podrían abreviarse con la sigla et al.). Si se necesita citar dos obras del mismo autor en un mismo paréntesis, el orden correcto es ubicar de últimas aquellas no publicadas o en proceso de publicación, de la siguiente forma:

Estudios anteriores (Varela y Rodríguez, 2007, 2009, en prensa)...

Identificar trabajos del mismo autor y con la misma fecha se diferencian con los sufijos a, b, c,... después del año, así:

Algunos estudios señalan en cuanto al emprendimiento (García, 2012a, 2012b y 2012c).

Cuando se citan 2 o más publicaciones de distintos autores sin coincidencias en sus apellidos, se debe separar cada obra con punto y coma así:

Sobre los estudios de redes de investigación algunos autores (Rodríguez, 2003; Cobo, 2011) señalan que...

Trabajos clásicos. Cuando la fecha de publicación no está disponible, así como algunos trabajos muy antiguos, cite el año de traducción que usted utilizó, precedido por la abreviatura trad., o el año de la versión que utilizó, seguido por versión:

Aristóteles, trad. 1931 Cuando se conoce la fecha original de publicación, incluirla en la citación así: James (1890/1983)

Citación de partes específicas de la fuente. Para citar indique la página, tablas, capítulos, figura o ecuación etc., en el punto apropiado del texto, de siempre el número de páginas para las citaciones. Note que la página, más no el capítulo, está abreviado en la citación:

(González, 1999, p. 45) (Ceballos, 2001, capítulo 2) Citas (dentro) de un paréntesis. En una citación que aparece entre paréntesis utilice coma en lugar de corchetes para señalar el año: (Ver tabla 4 de Rodríguez, 2007, para más información)...

Obras sin fecha de publicación. Común en obras clásicas muy antiguas, se debe poner el nombre del autor seguido de las siglas s.f. “Sin fecha” entre paréntesis así:

Ciertas teorías (Aristóteles, s. f.) sostienen... En la Biblia (s. f., ed. 2008) se comenta...

Revista de Administración Pública del GLAP

RAP-GLAP



Entre la norma y la realidad: Gobernanza territorial y capacidades institucionales en el Distrito Especial de Buenaventura (Ley 1617 de 2013)

Between Law and Practice: Territorial Governance and Institutional Capacity in the Special District of Buenaventura (Law 1617 of 2013)

Maira Alexandra Prieto Padilla, Edwin Arturo López Muñoz

Epistemología sobre la filosofía, las ciencias y los estudios políticos y jurídicos: Campo interdisciplinar

Epistemology on Philosophy, science, and Political and legal studies: interdisciplinary field

Jahir A. Gutiérrez-Ossa, Porfirio Cardona-Restrepo

Más allá del orden liberal: reconfiguración geopolítica, transición energética y disputa tecnológica

Beyond the Liberal Order: Geopolitical Reconfiguration, Energy Transition, and Technological Competition

Gabriel Orozco Restrepo, Gleidy Alexandra Urrego Estrada

Educación Técnica y Tecnológica en Colombia: Hacia un Modelo de Desarrollo Sostenible. Un análisis profundo sobre los desafíos, oportunidades y el camino a seguir para consolidar la formación T&T como motor de desarrollo, equidad y competitividad nacional

Technical and Technological Education in Colombia: Toward a Sustainable Development Model.

An in-depth analysis of the challenges, opportunities, and the path forward to consolidate technical and technological training as a driver of development, equity, and national competitiveness

Lorenzo Portocarrero Sierra

Política pública de salud mental: Desigualdades, violencias y consumo problemático de sustancias psicoactivas

Mental Health Public Policy: Inequalities, Violence, and Problematic Consumption of Psychoactive Substances

María del Pilar Balanta-Martínez

Editorial Fundación Cinara.